

PLIEGO ESPECÍFICO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE Y UN APARCAMIENTO MODULAR Y 100% DESMONTABLE PARA VEHÍCULOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.
EXPEDIENTE 586/2025

DISPOSICIONES GENERALES

1. RÉGIMEN GENERAL

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO:

1.1.1 El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se registrará por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) en lo que no haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior. Asimismo serán de aplicación, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás disposiciones de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Resultará de aplicación a la presente contratación, en los ámbitos que le sean de aplicación, lo dispuesto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en la construcción, el Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla esta ley, el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública, Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que resulta de aplicación de conformidad con el proyecto de obras, Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso

1.1.2 Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se registrarán por las disposiciones contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

1.1.3 En el caso de que la ejecución del contrato implica el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

1.1.4 En cuanto a la prestación material de los trabajos que requiera la concesión de obra, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones en materia social y laboral, incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el trabajo y en materia medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.

1.1.5 La presente contratación, de naturaleza administrativa, se registrará por lo dispuesto en este Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo.

1.1.6 Se promoverá la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético, mediante la incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

1.1.7 Se incorporará condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, siempre que exista vinculación con el objeto del contrato.

1.1.8 Asimismo, los contratos se registrarán por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPT) que atenderá, en la medida de lo posible, a la accesibilidad universal y de diseño para todos. Las prescripciones técnicas deberán tender a la apertura de la competencia, así como a la consecución de objetivos de sostenibilidad, redactando las mismas en base a requisitos de rendimiento vinculados al ciclo de vida o de exigencias funcionales, a fin de favorecer la innovación en la contratación y, siempre que el objeto del contrato afecte al medioambiente, a introducir criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático.

Las prescripciones técnicas se definirán en los términos previstos en los artículos 124 a 126 de la LCSP.

1.1.9 En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (en adelante PCAP), el PPT y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el PCAP.

1.1.10 Los contratos que resulten del procedimiento de adjudicación se ajustarán al contenido del PCAP, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos, no pudiendo incluirse en éstos estipulaciones distintas a las de los pliegos, sin perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada por la persona adjudicataria.

1.1.11 Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

- El presente pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y sus anexos.
- El pliego de prescripciones técnicas (PPT) y sus anexos.
- El documento de formalización contractual.
- Estudio de viabilidad y anteproyecto sometidos a información pública.
- El programa de trabajo presentado para la licitación.
- Memoria técnica de la concesión aportada para la licitación.
- El Proyecto Básico y de ejecución del aparcamiento
- La oferta y el Plan económico Financiero Presentados por el adjudicatario.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

1.1.12 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

1.1.13 El Órgano de Contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, facultada para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa en virtud de la delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero).

1.2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

1.2.1 La adjudicación del contrato se realizará mediante **PROCEDIMIENTO ABIERTO (apartado 4.1 del Cuadro Resumen)**, de acuerdo con lo establecido en los artículos 156 y siguientes de la LCSP, determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio atendiendo a los criterios de adjudicación que se establecen en la **cláusula 9.3 del presente pliego y en el apartado 11 del Cuadro Resumen**.

Dada la dificultad técnica que conlleva este expediente, el plazo máximo establecido en el art. 158.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para efectuar la adjudicación será de seis meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

1.2.1 La tramitación será **ORDINARIA** tal como se recoge en el apartado **4.3 del Cuadro Resumen**.

1.2.2 Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán por medios electrónicos.

A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en adelante SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente enlace:

<https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html>.

Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica, requiere el alta de usuario en la dirección electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”.

1.3 CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA:

El presente contrato está sujeto a regulación armonizada, al ser su valor estimado igual o superior a los umbrales establecidos y no encontrarse entre los excluidos de dicho régimen en el artículo 19 de la LCSP.

1.4 RECURSOS:

1.4.1 Serán objeto de recurso especial los actos y decisiones a las que se refiere el artículo 44 en sus apartados a), b), c) y d) de la LCSP.

Procederá con carácter potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. Contra la resolución de este recurso sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

En los procedimientos de adjudicación de los citados contratos, podrán adoptarse medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LCSP.

La resolución del recurso especial en materia de contratación, así como la adopción de las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares solicitadas corresponde al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, creado por el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre.

La resolución del recurso especial, sin perjuicio de la posible interposición de recurso contencioso-administrativo contra el mismo, será directamente ejecutiva.

1.4.2. El resto de las decisiones adoptadas por el Órgano de Contratación, una vez formalizado el contrato, será susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.5 JURISDICCIÓN:

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

1.6 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El Órgano de Contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, facultada para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa en virtud de la delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22, de 2 de febrero).

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO

2.1 DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

2.1.1 El objeto del presente contrato es la Concesión de Obras para la Construcción y posterior explotación de un Aparcamiento en Superficie y un Aparcamiento Modular Y 100% Desmontable para Vehículos en El Hospital Universitario Poniente, adscrito a la Central Provincial de Compras de Almería, así como la posible explotación comercial de una zona complementaria, todo ello conforme al anteproyecto que se adjunta en el pliego de prescripciones técnicas que rige este contrato.

El contrato definido tiene la calificación de contrato de concesión de obras públicas tal y como establece el artículo 14 de la LCSP.

La central provincial de Compras de Almería, -En adelante-, Administración- convoca el presente concurso para la selección de un concesionario para la construcción y posterior explotación de un Aparcamiento en Superficie y un Aparcamiento Modular Y 100% Desmontable para Vehículos en El Hospital Universitario Poniente, incluyendo la redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa, todo ello a partir de las especificaciones técnicas que se recogen en el Anteproyecto adjunto al presente pliego y en el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares.

El concesionario asumirá los riesgos económicos derivados de la ejecución de las obras cuya construcción y explotación son objeto del presente contrato de concesión de obra pública, que se regirá por el principio de riesgo y ventura.

La concesión de obra incluye la redacción de los proyectos de ejecución y actividad, la reordenación y construcción de los aparcamientos, incluida la construcción de un aparcamiento de dos plantas, modular y 100% desmontable, y su gestión y mantenimiento durante toda la duración del contrato, en los solares que actualmente ocupan los aparcamientos existentes en el hospital.

El anteproyecto de la obra, así como el estudio de viabilidad económico-financiera junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares y la oferta presentada por el licitador, revestirán carácter contractual.

Asimismo, el adjudicatario está obligado a proyectar y ejecutar las obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta cumpla su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, de acuerdo con su oferta.

Al carecer esta administración en la actualidad, de la disponibilidad de medios materiales para su construcción y personales para su explotación, se opta por la presente forma de gestión indirecta, por considerarla adecuada a los fines previstos y favorable a los intereses económicos al Hospital universitario de Torrecárdenas, entendiéndose que aportará eficiencia a la gestión del servicio, en beneficio de sus usuarios, procurando un buen nivel de coordinación con la administración, buscando criterios que vengán a simplificar y mejorar los servicios existentes.

La necesidad de dotar al HUP de esta infraestructura es cada vez mayor por las siguientes razones:

- El déficit de plazas de aparcamiento para atender la demanda estimada.
- Modernización de las instalaciones.
- Los constantes problemas de accesibilidad y seguridad, especialmente en las horas punta.

Dentro de las líneas de actuación, para el desarrollo de este aparcamiento, la licitación se ha iniciado mediante la Iniciativa Privada formulada por la mercantil, APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA), tomada en consideración y sometida a exposición pública, no habiéndose recibido alegaciones al expediente.

A. Zona de actuación



A.1 Parámetros urbanísticos:

- Superficie en planta: 22.786,74 m.
- Plazas de aparcamiento para vehículos: 1.215.
- Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida: 23.
- Plazas de aparcamiento para vehículos especiales: 8.
- Plazas de aparcamiento para motocicletas: 30.
- Superficie media de las plazas de aparcamiento: 23,49 m2.
- Dimensiones de plaza vehículos automóviles: 2,50x5,00 m.
- Dimensiones de plaza vehículos de dos ruedas: 2,50x1,50 m.
- Ascensores: 7,22 m2.
- Aseos: 16 m2.
- El aparcamiento contará con sistemas de lectura de matrículas y pago por app.
- Se instalará un circuito cerrado de videovigilancia

B. Uso del aparcamiento.

Los usuarios del aparcamiento serán del tipo principalmente:

a) Usuarios por rotación: Mediante el uso del aparcamiento, abonando como máximo la tarifa establecida por estancia (24h).

b) Abonados: Los que por periodos mensuales, quincenales y semanales utilizan el aparcamiento bajo alguna de las modalidades de abonos que se ofertarán a trabajadores y usuarios.

El número de plazas destinadas a usuarios de abono será fijado por el adjudicatario del concurso objeto y variable atendiendo a las necesidades de la demanda en el tiempo.

El número mínimo de abonos de trabajadores y empresas contratadas no podrá ser inferior a 350.

C. Alcance del contrato

C.1 Más específicamente, constituye el objeto del contrato, las siguientes actuaciones:

- i. La redacción de los proyectos de construcción, de conformidad con las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Anteproyecto de las obras que, aprobadas por la Administración, forman parte de la documentación del presente concurso.
- ii. La ejecución y dirección de las obras, así como su mantenimiento y vigilancia durante todo el plazo concesional hasta la recepción, así como la adquisición de todo el equipamiento y mobiliario necesario para la prestación de los servicios correspondientes.
- iii. La explotación económica de las obras anteriormente relacionadas, con derecho de percibir un precio de los usuarios, como retribución única del concesionario por la construcción de la totalidad de las mismas.
- iv. La posibilidad de una Explotación comercial de una zona complementaria, (una superficie con una superficie aproximada de 620m)
- v. La conservación, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones.
- vi. El resto de obligaciones y contrapartidas que se deriven de los pliegos y del contrato.

C.2 Alcance de las obras.

Las obras a realizar que deberán ser contempladas en el Proyecto Básico y de Ejecución y acordes al Anteproyecto, serán las siguientes:

- Construcción del edificio del propio aparcamiento, así como los aparcamientos en superficie.
- Desvío de los servicios afectados.

El licitador deberá contactar con las Empresas Suministradoras y prever en su proyecto básico los servicios afectados de agua y saneamiento, electricidad, teléfono, gas, cable, etc..., que sea preciso desviar, así como hacer la previsión del posible paso, en su caso, de las infraestructuras futuras.

- Instalaciones para el funcionamiento del aparcamiento.
- Obras de urbanización y reordenación del aparcamiento.

D. Capacidad

Sus características técnicas se recogen en el PPT y en el anteproyecto de obra que acompañan al presente PCAP, considerando que el aparcamiento contará con 1.276 plazas (frente a las 896 actuales) para vehículos, en 4 zonas previstas para aparcamientos:

ZONAS DE APARCAMIENTO PROPUESTAS	PLAZAS ACTUALES	PLAZAS AMPLIADAS
Aparcamiento reservado a profesionales (ZONA A)	290	559
Aparcamiento general (ZONA B)	497	608
Total plazas aparcamiento	787	1.167
Aparcamiento temporal profesionales (ZONA C)	57	57
Aparcamiento temporal general (ZONA D)	52	52
Total plazas aparcamiento temporales	109	109
TOTAL	896	1.276

2.1.2 Procedimiento de licitación de un contrato de concesión promovido por la iniciativa privada

En la actualidad, la iniciativa privada en España se encuentra regulada en los artículos 28.3 y 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 2014/24/JUE, de 26 de febrero LCSP).

El procedimiento de licitación de un contrato promovido por la iniciativa privada es igual al surgido de la Iniciativa pública, salvo por dos aspectos que la LCS P otorga al proponente como medida de fomento la Iniciativa privada (art.247.5LCSP):

- Un 5% de puntuación adicional a la hora de aplicar los criterios de adjudicación que establezca el pliego de Cláusulas administrativas particulares.
- Adicionalmente si, concluido el procedimiento, el proponente no resulta adjudicatario, tiene derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para la elaboración del estudio de viabilidad, incrementándose en un 5% la cantidad de (37.010,69 €) IVA no incluido como compensación, gastos que deberá abonar el adjudicatario, salvo que resultase adjudicataria la entidad APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S. A. (AUSSA), los cuales se entenderán ya satisfechos.

2.1.3 Antecedentes administrativos

Indicar que, al ser una concesión de obras de iniciativa privada, el estudio de viabilidad y ha sido aportado por la empresa APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA).

- Con fecha 16 de mayo de 2024, la mercantil APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA) presentó en el registro general de la Junta de Andalucía, solicitud del estudio de viabilidad mediante iniciativa privada para la construcción y explotación de un aparcamiento para vehículos con estructura 100% desmontable y reutilizable en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido, provincia de Almería.

- Mediante Resolución de la Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud, de 26 de noviembre de 2024 se acordó admitir a trámite este Estudio de viabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Al ser una concesión de obra de iniciativa privada, en cumplimiento de los artículos 247.3 de la LCSP, se ha sometido, mediante publicación en el BOJA, a información pública durante un mes el estudio de viabilidad y el anteproyecto de construcción, aportado por la empresa APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA).
- No se han presentado alegaciones al estudio de viabilidad ni al anteproyecto de construcción y explotación del aparcamiento de referencia.
- En cumplimiento del artículo 248 de la LCSP se elaboró ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS, DE UN APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE, que se ha sometido, mediante publicación en el BOJA, a información pública durante un mes.
- No se han presentado alegaciones al anteproyecto de construcción y explotación del aparcamiento de referencia.
- En fecha 3 de abril de 2025 se dictó resolución aprobándose el estudio de viabilidad presentado por la entidad AUSSA, APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A., para la construcción de un aparcamientos mediante infraestructura modular y 100% desmontable en cuestión de días y su gestión y mantenimiento, en el Hospital Universitario Poniente La concesión se otorga a salvo del derecho de propiedad de la Administración y sin perjuicio de terceros.

2.1.4 Necesidad e idoneidad de la contratación, (artículo 28 LCSP):

Al carecer el Servicio Andaluz de Salud, en la actualidad, de la disponibilidad de medios materiales para su construcción y personales para su explotación, se opta por la presente forma de gestión indirecta, por considerarla adecuada a los fines previstos y favorable a los intereses económicos del Servicio Andaluz de Salud, entendiendo que aportará eficiencia a la gestión del aparcamiento en beneficio de sus usuarios, procurando un buen nivel de coordinación con la gestión del Hospital Universitario Poniente (en adelante HUP), buscando criterios que vengán a simplificar y mejorar los servicios que los ciudadanos demandan.

Con el presente contrato se pretende cubrir la necesidad administrativa de mejorar y ampliar los actuales aparcamientos públicos existentes en el Hospital Universitario Poniente (HUP), pues en la actualidad se ha demostrado insuficiente para cubrir las necesidades de los profesionales del hospital y, sobre todo, de los usuarios de este.

Hay que tener en cuenta que los usuarios del HUP suelen acudir en su mayoría en sus vehículos particulares, pues es el centro de referencia del Distrito Sanitario Poniente de la provincia de Almería, que incluye una población de más de 288.000 habitantes con una dispersión geográfica muy amplia (todas las poblaciones que conforman la comarca del poniente almeriense), y por encontrarse el centro hospitalario fuera del núcleo urbano.

A esto se añade el uso del aparcamiento que hacen los más de 2.000 profesionales, propios y de empresas externas que prestan sus servicios en el hospital.

Todo ello hace que las 787 plazas actuales de vehículos existentes sean completamente insuficientes, repercutiendo en la calidad de la prestación sanitaria.

Según ello, en aras del mantenimiento de una asistencia sanitaria de calidad y de una prestación de servicios que la complementan, acorde con las peticiones y necesidades tanto de público como de personal, se considera justificada la

necesidad de proceder a la concesión de obra sobre la construcción y explotación de aparcamientos en el Hospital Universitario Poniente.

A tal efecto, el objeto, contenido y procedimiento elegido, mediante el contrato proyectado, son los idóneos para su satisfacción.

Las obras constituyen una intervención para dotar al conjunto hospitalario de un aparcamiento de vehículos en altura que atienda adecuadamente (en términos de calidad, mejoras tecnológicas, sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia en el empleo de los recursos) la demanda de plazas de estacionamiento y la movilidad interior del Hospital. **Apartado 5.2 del Cuadro Resumen.**

Igualmente, están comprendidas en la concesión además de las inversiones de obra, instalaciones y equipamientos, los suministros y contratación de los servicios de cualquier clase que resulten necesarios para la correcta explotación de las instalaciones objeto de la concesión, a lo largo de todo el tiempo de vigencia de la misma.

El contrato implica la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación del aparcamiento abarcando el riesgo de demanda real del mismo, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.

Por todo ello, se considera que el objeto del presente contrato resulta idóneo para satisfacer las necesidades descritas anteriormente.

2.1.5 La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna de conformidad con el artículo 139 LCSP, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el objeto de esta contratación.

2.1.6 En el apartado **5.1 del Cuadro Resumen** se incluyen las codificaciones correspondientes al CPV.

Los CPV del presente contrato son:

98351000-8 Servicios de gestión de aparcamientos).

45223300-9 Trabajos de construcción de estacionamientos.

2.1.7 La justificación de no dividir en lotes el contrato se recoge en el apartado **5.3 del cuadro resumen.**

2.1.8 Este contrato será ofertado a la totalidad, por las razones que se indican en el apartado **5.3 del Cuadro Resumen.**

2.1.9 No procede la subasta electrónica (artículo 143 LCSP).

2.1.10 Perfil de contratante. En el Perfil del Contratante se publicará el anuncio de la licitación y toda la información o dato referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 y 154 LCSP y en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de Sector Público (<http://contrataciondelestado.es>).

2.2.-PLAZOS DE EJECUCIÓN.

2.2.1. Duración del contrato de Concesión: La duración del contrato de Concesión de Obra Pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 29.6 LCSP será de **36 años desde la aprobación por el órgano de contratación del Proyecto de ejecución presentado por el concesionario.**

La duración propuesta es acorde con lo recogido en el artículo 29.6.a) de la LCSP, en función de las obras y los servicios que constituyen su objeto, calculándose 35 años de explotación, la duración necesaria para la recuperación de la inversión inicial y la obtención de un rendimiento sobre el capital invertido beneficio adecuado, según se justifica en el estudio de viabilidad aportado por la sociedad que ejerce la iniciativa privada y que se incorpora al expediente.

Dicho plazo de duración se encuentra en un punto de equilibrio entre lo requerido por un posible inversor y el interés general de la Administración, considerándose adecuado para atraer a los operadores del sector.

2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga, como se detalla en el **apartado 7.3 del Cuadro Resumen.**

2.2.3. El Plazo para la presentación del Proyecto de ejecución: El adjudicatario dispondrá de un plazo de **12 semanas desde la firma del contrato para la redacción del proyecto de ejecución. Una vez redactado el proyecto deberá ser aprobado por el Órgano de contratación.**

Iniciado el contrato las primeras **13 semanas** se destinarán a la obtención de todos los permisos legales para su puesta en funcionamiento (trabajos previos, permisos, licencias, etc.). Transcurrido este plazo se aprobará el Acta de comprobación del replanteo.

2.2.4 Plazo de ejecución de la obra y puesta en funcionamiento. Para la ejecución de las obras se determina el plazo de ejecución de 39 semanas, pudiendo reducirse en el caso de que la contratista ofrezca uno menor, a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo

Las obras se realizarán conforme al proyecto en el plazo establecido en este pliego o en la oferta, si éste fuere menor, y aprobado por el órgano de contratación.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El concesionario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del Responsable del contrato, en su caso, o el Representante de la Administración, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Estos plazos, según el artículo 29.6) de la LCSP, solo podrán ser ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en el artículo 270 de la LCSP.

Así mismo, no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de las obras, aquellos períodos en los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración o debida a fuerza mayor. Si la concesionaria fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, en los plazos previstos en el 153 LCSP.

El contratista se entenderá incurso en mora si no inicia la ejecución del contrato en los plazos previstos, no siendo necesaria intimación previa a este respecto, (artículo 193 LCSP). Cuando, por alguna de las causas de fuerza mayor reconocidas en la vigente Legislación, el órgano de contratación competente, acuerde prorrogar el plazo señalado, la mora empezará a computarse tras el transcurso de la prórroga.

3. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS

Las obras objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el concesionario, que en todo caso asumirá el riesgo operacional de la concesión.

La emisión de títulos, la hipoteca de la concesión, los créditos participativos, así como cualquier otra fuente de financiación privada de la concesión queda sujeta a los límites y condiciones establecidos en la LCSP.

El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios los ingresos por la aplicación de las tarifas aportadas en el estudio de viabilidad que podrán ser mejoradas a la baja en la oferta y que formarán parte inseparable de la documentación contractual.

Las tarifas tendrán el carácter de máximas y los concesionarios podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente.

3.1 Inversión prevista a realizar. Presupuesto de ejecución material.

La inversión inicial recogida en el anteproyecto de construcción y explotación de las obras asciende a 5.264.703,14 €, IVA excluido, dividiéndose:

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO EJECUCIÓN (INSTALACIONES TÉCNICAS)	5.177.653,14 €
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN	53.750 €
MOBILIARIO	800 €
HARDWARE	1.000 €
SOFTWARE	16.500 €
OTRO	15.000 €
TOTAL	5.264.703,14 €

EL PRESUPUESTO EJECUCIÓN (INSTALACIONES TÉCNICAS), se obtiene considerando las siguientes partidas de costes:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (P.E.M.)	4.017.115,69 €
GASTOS GENERALES (GG)	200.855,78 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (BI)	200.855,78 €
FIANZA GESTIÓN DE RESIDUOS	60.256,74 €
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)	140.599,05 €
LICENCIAS	74.316,64 €
GASTOS COLEGIALES	5.750,00 €
PROYECTOS OBRA	17.467,56 €

DIRECCIÓN OBRA	309.317,91 €
MAQUINARIA GESTIÓN Y CONTROL	151.117,99
TOTAL	5.177.653,14 €

De acuerdo con el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se ha denominado el presupuesto de ejecución material, el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

La totalidad de la inversión a realizar por la entidad concesionaria está comprendida también por los costes del proyecto básico y de ejecución, licencias, estudios y equipamiento de la Ciudad, así como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sobre la concesión.

El coste añadido por las expropiaciones es nulo ya que en este caso el HUP dispone del 100% de la titularidad de la parcela objeto de actuación.

Los precios de ejecución material establecidos para determinar el PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (P.E.M.) están contrastados con la realidad actual del mercado y son el resultado promedio del coste constructivo de infraestructuras de similares características, atendiendo a idéntico nivel de calidad, acabados y dotaciones propuestas, obteniéndose la siguiente valoración económica de la obra:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.	57.239,71 €
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS	104.157,52 €
SANEAMIENTO	66.031,59 €
CIMENTACIONES.	119.559,26 €
ESTRUCTURAS	2.825.557,11 €
ALBAÑILERÍA	2.323,54 €
INSTALACIONES	425.389,19 €
REVESTIMIENTOS	25.326,09 €
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	22.164,05 €
PINTURAS	57.219,25 €
URBANIZACIONES	116.073,40 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	78.430,00 €
CONTROL DE CALIDAD	58.822,50 €
SEGURIDAD Y SALUD	58.822,50 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL OBRAS (P.E.M.)	4.017.115,69 €

No obstante, el Presupuesto de Ejecución Material será aquel que resulte tras la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, que se elaborará valorando las distintas unidades de obra proyectadas, entendiéndose como base de datos de la construcción aquella que se encuentre vigente en el momento de la redacción del proyecto.

El licitador estará obligado a invertir la cantidad establecida en su oferta. Durante la ejecución de los trabajos vendrá obligado a informar en todo momento a la Administración de las cantidades reales invertidas, pudiendo ésta realizar auditorías y trabajos de inspección de los costes reales según desee y que irán a coste del concesionario.

3.2 Valor estimado del contrato

El artículo 101.1 de la LCSP recoge que “A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:” y en su apartado b) indica que “En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios”.

Tal como se recoge en el estudio de viabilidad presentada en la iniciativa privada, el importe neto de la cifra de negocios, IVA excluido, asciende a:

Año	Ingresos anuales previstos
año 1	560.476,35
año 2	561.114,29
año 3	573.238,19
año 4	573.874,50
año 5	585.988,50
año 6	586.622,67
año 7	598.294,83
año 8	598.497,48
año 9	610.131,75
año 10	610.325,42
año 11	621.921,20
año 12	622.105,66
año 13	633.662,38
año 14	633.837,39
año 15	645.354,45
año 16	645.519,78
año 17	656.996,57
año 18	657.151,98
año 19	668.587,88
año 20	668.733,12
año 21	678.574,56
año 22	678.700,03
año 23	688.471,15
año 24	688.576,36
año 25	698.276,08
año 26	698.360,55
año 27	707.987,76
año 28	708.050,97
año 29	717.604,55
año 30	717.646,01
año 31	727.124,81

Año	Ingresos anuales previstos
año 32	727.144,01
año 33	736.546,86
año 34	736.543,27
año 35	745.869,02
Total	22.967.910,36

Dicha cantidad Ascende a Veintidós millones novecientos sesenta y siete mil novecientos diez euros con treinta y seis céntimos (22.967.910,36€).

En los términos establecidos en el artículo 289 LCSP el concesionario tiene derecho a la contraprestación económica para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio consistente en una retribución en función de su utilización que se percibirá directamente por los usuarios.

Los ingresos indicados provienen del pago de una tarifa por estancia y de la venta de abonos estipulados.

En la **cláusula 3.3 del presente pliego** se recogen las tarifas por estancia y por abonos a aplicar durante la vigencia de la concesión, no contemplándose su revisión.

El incremento anual de ingresos previsto proviene de la aplicación de las tarifas indicadas y los incrementos esperados de la rotación de vehículos.

La división del valor estimado entre costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial, según los datos recogidos en el estudio de viabilidad, se indican en la siguiente tabla (con redondeo a la unidad más cercana):

Año	Ingresos anuales	Costes servicios	Gastos personal	Costes directos	Gastos generales	Coste indirecto- amortización	Coste indirecto- gasto financiero	Coste indirecto	Beneficio industrial
año 1	560.476,35	-89.347,08	-141.962,64	-231.309,72	-23.130,97	-146.622,26	-133.426,25	-280.048,51	25.987,15
año 2	561.114,29	-87.045,07	-146.220,92	-233.265,99	-23.326,60	-146.622,26	-259.476,47	-406.098,73	-101.577,03
año 3	573.238,19	-88.780,65	-150.606,93	-239.387,58	-23.938,76	-146.622,26	-249.101,83	-395.724,08	-85.812,24
año 4	573.874,50	-90.531,66	-152.113,63	-242.645,28	-24.264,53	-146.622,26	-238.041,87	-384.664,12	-77.699,43
año 5	585.988,50	-92.472,56	-153.635,40	-246.107,96	-24.610,80	-146.622,26	-226.251,33	-372.873,59	-57.603,84
año 6	586.622,67	-94.295,54	-155.172,40	-249.467,94	-24.946,79	-146.622,26	-213.681,96	-360.304,21	-48.096,28
año 7	598.294,83	-96.308,54	-156.724,79	-253.033,33	-25.303,33	-146.622,26	-200.282,30	-346.904,55	-26.946,38
año 8	598.497,48	-98.200,20	-158.292,71	-256.492,92	-25.649,29	-146.622,26	-185.997,51	-332.619,76	-16.264,49
año 9	610.131,75	-100.293,64	-159.876,33	-260.169,97	-26.017,00	-146.622,26	-28.067,23	-174.689,49	149.255,29
año 10	610.325,42	-102.262,68	-176.234,26	-278.496,94	-27.849,69	-146.622,26	-23.974,80	-170.597,05	133.381,72
año 11	621.921,20	-104.439,70	-177.997,32	-282.437,02	-28.243,70	-146.622,26	-20.085,26	-166.707,52	144.532,96
año 12	622.105,66	-106.489,22	-179.778,02	-286.267,24	-28.626,72	-146.622,26	-16.389,28	-163.011,54	144.200,16
año 13	633.662,38	-108.753,08	-181.576,55	-290.329,62	-29.032,96	-146.622,26	-12.878,65	-159.500,90	154.798,89
año 14	633.837,39	-110.886,28	-183.393,08	-294.279,36	-29.427,94	-146.622,26	-9.546,73	-156.168,99	153.961,11
año 15	645.354,45	-113.240,37	-192.788,26	-306.028,63	-30.602,86	-146.622,26	-6.389,45	-153.011,70	155.711,25
año 16	645.519,78	-115.460,60	-194.716,94	-310.177,53	-31.017,75	-146.622,26	-3.408,32	-150.030,57	154.293,92
año 17	656.996,57	-117.908,42	-196.664,91	-314.573,34	-31.457,33	-146.622,26	-645,82	-147.268,07	163.697,82
año 18	657.151,98	-120.219,14	-198.632,39	-318.851,53	-31.885,15	-158.294,44	0,00	-158.294,44	148.120,85
año 19	668.587,88	-122.764,37	-200.619,55	-323.383,92	-32.338,39	-158.294,44	0,00	-158.294,44	154.571,12
año 20	668.733,12	-125.169,18	-210.385,74	-335.554,92	-33.555,49	-158.294,44	0,00	-158.294,44	141.328,27
año 21	678.574,56	-127.672,56	-212.168,65	-339.841,21	-34.226,60	-158.294,44	0,00	-158.294,44	146.212,30
año 22	678.700,03	-130.226,01	-213.969,38	-344.195,40	-34.911,13	-158.294,44	0,00	-158.294,44	141.299,05
año 23	688.471,15	-132.830,53	-215.788,12	-348.618,66	-35.609,36	-158.294,44	0,00	-158.294,44	145.948,69
año 24	688.576,36	-135.487,14	-217.625,05	-353.112,20	-36.321,54	-158.294,44	0,00	-158.294,44	140.848,18
año 25	698.276,08	-138.196,89	-219.480,35	-357.677,24	-37.047,97	-158.294,44	0,00	-158.294,44	145.256,43
año 26	698.360,55	-140.960,83	-221.675,15	-362.635,98	-37.788,93	-158.294,44	0,00	-158.294,44	139.641,19
año 27	707.987,76	-143.780,04	-223.891,91	-367.671,95	-38.544,71	-158.294,44	0,00	-158.294,44	143.476,65
año 28	708.050,97	-146.655,64	-226.130,83	-372.786,47	-39.315,61	-158.294,44	0,00	-158.294,44	137.654,46
año 29	717.604,55	-149.588,76	-228.392,13	-377.980,89	-40.101,92	-158.294,44	0,00	-158.294,44	141.227,30
año 30	717.646,01	-152.580,53	-230.676,05	-383.256,59	-40.903,96	-158.294,44	0,00	-158.294,44	135.191,03
año 31	727.124,81	-155.632,14	-232.982,82	-388.614,96	-41.722,04	-158.294,44	0,00	-158.294,44	138.493,37
año 32	727.144,01	-158.744,78	-235.312,64	-394.057,43	-42.556,48	-158.294,44	0,00	-158.294,44	132.235,66
año 33	736.546,86	-161.919,68	-237.665,77	-399.585,45	-43.407,61	-158.294,44	0,00	-158.294,44	135.259,36
año 34	736.543,27	-165.158,07	-240.042,43	-405.200,50	-44.275,76	-158.294,44	0,00	-158.294,44	128.772,56
año 35	745.869,02	-168.461,23	-242.442,85	-410.904,09	-45.161,27	-158.294,44	0,00	-158.294,44	131.509,21
Total	22.967.910,36	-4.292.762,82	-6.865.636,92		-1.147.120,97	-5.341.878,34	-1.827.645,06	-7.169.523,40	3.492.866,25

Los costes de amortización incluyen, principalmente, la amortización de la inversión inicial, que es la construcción del aparcamiento que la adjudicataria va a explotar en los 35 años siguientes y que, según se recoge en el estudio de viabilidad, asciende a 5.177.653,14 € IVA excluido.

Los gastos financieros se corresponden con los intereses del préstamo que la adjudicataria debería solicitar para financiar la construcción del aparcamiento, que sería a 16 años y con un interés nominal anual del 6,50%, todo ello recogido en el estudio de viabilidad.

Reseñar que el beneficio industrial total de la concesión es del 15,21% de los ingresos totales, siendo la tasa interna de retorno de los accionistas un 5,67% después de impuestos, tal como se recoge en el estudio de viabilidad.

Con respecto a las exigencias recogidas en los artículos 100.2 y 101.2 sobre el desglose de los costes salariales y su desagregación por género y categoría profesionales estimados a partir del convenio laboral de referencia, y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos recogida en sus resoluciones números 633/2019 de 13 de junio de 2019 y 739/2019 de 04 de julio de 2.019, consideramos que no es de aplicación, pues solo es aplicable a los contratos de servicios en los que los costes laborales son el principal coste, hay trabajadores empleados y puestos a disposición solo para la ejecución del contrato con la Administración, y sus costes salariales son precio y, por tanto,

forman parte del precio del contrato, pues son un factor del precio y un precio unitario por trabajador por unidad de tiempo de trabajo adicional, circunstancias que no concurren en esta contratación.

3.2.1 El método utilizado para calcular el valor estimado del contrato, conforme al artículo 101 de la LCSP, es el siguiente:

- a) Se ha tomado el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que, según las estimaciones recogidas en el estudio de viabilidad presentado, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y la explotación del mismo objeto del presente contrato.
- b) No se adiciona ningún importe por los suministros aportados por la Administración, al no realizarse el mismo.
- c) No se contemplan prórrogas, ni se prevé abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, ni se recogen modificaciones, por lo que no adiciona nada por estos conceptos.
- d) Así mismo, y según lo recogido en el artículo 101.3 de la LCSP, se indica que no se adiciona ninguna cantidad al cálculo del valor estimado por los siguientes conceptos, pues:
 - a. No existen rentas procedentes del pago de tasas y multas por los usuarios de las obras o servicios, distintas de las recaudadas en nombre del poder adjudicador, al no estar autorizada.
 - b. No existen pagos o ventajas financieras concedidos a la concesionaria por el poder adjudicador o por cualquier otra autoridad pública, ni la compensación por el cumplimiento de una obligación de servicio público o subvenciones a la inversión pública.
 - c. No se contemplan subsidios o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, procedentes de terceros a cambio de la ejecución de la concesión.
 - d. No se permite la venta de ningún activo que forme parte de la concesión.
 - e. No se aporta por parte del poder adjudicador ningún tipo de suministros o servicios a la concesionaria.

3.3 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO

En los términos establecidos en el artículo 289 LCSP el concesionario tiene derecho a la contraprestación económica para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio consistente en una retribución en función de su utilización que se percibirá directamente por los usuarios.

El Hospital Universitario Poniente, lugar donde se va a construir el aparcamiento en superficie y un aparcamiento modular y 100% desmontable, y que va a ser realizado, explotado y mantenido mediante el presente contrato de concesión de obras, no va a recibir ninguna contraprestación económica por el mismo.

a) Tarifas por estancia y abonos para público general:

Las tarifas que a continuación se definen tendrán el carácter de máximas, pudiendo los concesionarios aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente, serán pagadas por los usuarios del aparcamiento y percibidas por la concesionaria en concepto de contraprestación por la obra realizada.

Año de la concesión	Abono general (en euros)			Por estancia (en euros)
	Mensual	Quincenal	Semanal	
	Tarifa	Tarifa	Tarifa	Tarifa
año 1	30,00	15,00	7,50	2,00
año 2	30,00	15,00	7,50	2,00
año 3	30,50	15,25	7,63	2,05
año 4	30,50	15,25	7,63	2,05
año 5	31,00	15,50	7,75	2,10
año 6	31,00	15,50	7,75	2,10
año 7	31,50	15,75	7,88	2,15
año 8	31,50	15,75	7,88	2,15
año 9	32,00	16,00	8,00	2,20
año 10	32,00	16,00	8,00	2,20
año 11	32,50	16,25	8,13	2,25
año 12	32,50	16,25	8,13	2,25
año 13	33,00	16,50	8,25	2,30
año 14	33,00	16,50	8,25	2,30
año 15	33,50	16,75	8,38	2,35
año 16	33,50	16,75	8,38	2,35
año 17	34,00	17,00	8,50	2,40
año 18	34,00	17,00	8,50	2,40
año 19	34,50	17,25	8,63	2,45
año 20	34,50	17,25	8,63	2,45
año 21	34,50	17,50	8,75	2,50
año 22	34,50	17,50	8,75	2,50
año 23	34,50	17,75	8,88	2,55
año 24	34,50	17,75	8,88	2,55
año 25	34,50	18,00	9,00	2,60

Año de la concesión	Abono general (en euros)			Por estancia (en euros)
	Mensual	Quincenal	Semanal	
	Tarifa	Tarifa	Tarifa	Tarifa
año 26	34,50	18,00	9,00	2,60
año 27	34,50	18,25	9,13	2,65
año 28	34,50	18,25	9,13	2,65
año 29	34,50	18,50	9,25	2,70
año 30	34,50	18,50	9,25	2,70
año 31	34,50	18,75	9,38	2,75
año 32	34,50	18,75	9,38	2,75
año 33	34,50	19,00	9,50	2,80
año 34	34,50	19,00	9,50	2,80
año 35	34,50	19,25	9,63	2,85

La columna “Por estancia” recoge la tarifa, IVA NO incluido, a pagar por el usuario por cada estancia de su vehículo en el aparcamiento.

Por estancia se entiende cada uso que se haga del aparcamiento, siempre que no supere las 24 horas. En caso de que se superen las 24 horas de uso continuado, se cobrará una estancia por cada 24 horas completas y otra por la fracción de 24 horas restante, si la hubiera.

Como ejemplo: vehículo que entra un lunes a las 08:00 de la mañana y sale el miércoles a las 14:00 horas. Habrá estado estacionado 54 horas consecutivas, por lo que pagará 3 estancias, correspondientes a dos plazos de 24 horas completas (del lunes a las 08:00 horas hasta el miércoles a las 08:00 horas) y una al plazo de 6 horas (desde las 08:00 horas del miércoles a las 14:00 horas del mismo día).

En las columnas “Abono general” se recogen las tarifas, IVA no incluido, de las tipologías de abonos mínimas que deberá poner a disposición de los usuarios la contratista. Siendo la base el abono mensual, las tarifas quincenales y semanales se obtendrán por la división entre 2 y 4, respectivamente, del importe del abono mensual. Todas las tarifas permitirán usos ilimitados del aparcamiento durante el periodo en que tenga vigencia.

Los años relativos a la explotación de la concesión, comienzan a contarse desde la fecha de puesta en funcionamiento del aparcamiento, que deberá contar con la autorización expresa del Órgano de contratación.

Estas tarifas son de mercado, pues se han tomado del estudio de viabilidad realizado por la empresa que ha presentado la iniciativa privada.

Estas tarifas, en cualquier caso, podrán ser mejoradas por los licitadores en su oferta, tanto en cuanto en modalidades como en precios, resultando de aplicación las correspondientes a las ofertadas por la concesionaria y que formarán parte inseparable de la documentación contractual.

b) Abonos para trabajadores del Hospital y empresas contratadas por el mismo.

Los licitadores deberán presentar en su oferta tarifas para abonos de trabajadores del Hospital y empresas contratadas por el mismo, y que mejore las tarifas de abono general mensual. El número mínimo de abonos de trabajadores y empresas contratadas no podrá ser inferior a 350. El órgano de contratación deberá autorizar al comienzo de cada año de la concesión, el número de abonos máximos vigentes cada mes, siempre que los mismos vayan a exceder de 350, contado los mensuales como uno, los quincenales como 0,5 y los semanales como 0,25 para su cómputo mensual.

c) Puntos de recarga eléctrica para vehículos:

En caso de instalarse, instalaciones de recarga de vehículos eléctricos según normativa vigente, la concesionaria percibirá como retribución, las tarifas correspondientes que serán a precio de mercado, no pudiendo ser inferiores a lo establecido en el apartado 6.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Ingresos provenientes de las zonas complementarias de explotación comercial.

La concesionaria podrá percibir como retribución los ingresos generados por su explotación.

Existen dos superficies susceptibles de explotación comercial

Superficie máxima para actividades complementarias: 120 m²

Superficie máxima para publicidad (interior y exterior): 500 m²

Quedará prohibido realizar cualquier actividad, de las anteriormente descritas, Apartados c y d) que suponga una posible retribución al concesionario, sin que previamente se realice propuesta detallada que especifique la actividad a realizar y se obtenga la autorización expresa para ello del órgano de contratación.

3.4 CLÁUSULAS DE VARIACIÓN Y REVISIÓN DE TARIFAS:

3.4.1 Variación de tarifas.

No se contempla revisión de tarifas durante la vigencia de la concesión, salvo por los casos que específicamente se establezcan como modificación del contrato.

3.4.2 Revisión de tarifas

Las tarifas indicadas en la cláusula 3.3 del presente pliego, no estarán sometidos a revisión.

3.5 EXISTENCIA DE CRÉDITO:

3.5.1 Dado que no se prevén pagos a la adjudicataria de forma directa ni indirecta, pues las obras de construcción y los gastos de explotación (directos, indirectos, generales, otros necesarios y de personal) los va a asumir la concesionaria y también los posibles

gastos de financiación externa en caso de que lo necesite, y, además, tampoco se le va a suministrar ni prestar ningún servicio por parte de la Administración, no es necesario que el Servicio Andaluz de Salud haga constar la existencia de crédito suficiente para este contrato.

3. 6 RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN (artículos 14.4, 197, 239, 265 y siguientes de la LCSP)

3.6.1 Financiación de las obras.

Las obras objeto de concesión serán financiadas totalmente por la concesionaria. Atendiendo al Régimen Económico de la concesión, el presente contrato no requiere de dotación de crédito presupuestario.

3.6.2 Régimen económico

La concesionaria, en todo caso, asumirá el riesgo operacional en los términos descritos en el artículo 14.4 LCSP.

La concesión que se regula en este Pliego se establece a riesgo y ventura de la concesionaria, no pudiéndose considerar como desequilibrio económico de la misma las que pudieran derivarse de la incorrección de los datos utilizados y/o reflejados por el licitador en su oferta, ni de las simulaciones económicas por él realizadas en sus estudios económicos de la oferta.

El Servicio Andaluz de Salud no participará en la explotación del aparcamiento, ni asegurará a la concesionaria un rendimiento mínimo. La concesionaria gestionará el aparcamiento a su riesgo y ventura, con los derechos económicos que se regulan en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

El reequilibrio económico de la concesión solo se podrá realizar por las causas recogidas en el artículo 270 de la LCSP, y cumpliendo los requisitos y los medios en él recogidos.

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD TITULAR DE LA CONCESIÓN.

El adjudicatario podrá constituir una sociedad de responsabilidad limitada, titular de la concesión, antes de la formalización del contrato, que será la responsable de la ejecución de las obras e instalaciones y de la explotación de los aparcamientos y de la zona complementaria. Se constituirá de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en este Pliego y en la legislación aplicable, y con plena sujeción a los compromisos asumidos por el adjudicatario en su oferta.

La sociedad titular de la concesión se registrará por los principios y normas de contabilidad contenidos en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y demás legislación mercantil, en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad aplicable a las empresas españolas y sus adaptaciones sectoriales y la de-más legislación que le sea específicamente aplicable, o que la sustituya.

La sociedad titular de la concesión asumirá como propias todas las obligaciones del adjudicatario frente a la administración. No obstante, el adjudicatario seguirá respondiendo solidariamente con la sociedad titular de la concesión, de todas esas obligaciones, sin que ni la constitución de la sociedad titular de la concesión, ni la asunción por su parte de tales obligaciones, libere o limite la responsabilidad del adjudicatario frente a la Administración.

No obstante, esta responsabilidad solidaria conjunta del adjudicatario con la sociedad titular de la concesión, únicamente estará vigente durante un periodo de dos años a contar desde la fecha del acta final de comprobación de las obras, momento

éste en que la responsabilidad derivada de las obligaciones asumidas por el adjudicatario y la sociedad titular de la concesión en el presente Pliego, serán únicamente exigibles a esta última.

En el supuesto de que la oferta adjudicataria sea una oferta conjunta realizada por varias empresas, deberá ser constituida la sociedad titular de la concesión por todas ellas, en la proporción accionarial que resulte de los porcentajes de participación que hayan indicado en su oferta conjunta los licitadores agrupados. En tal supuesto, la responsabilidad solidaria con la sociedad titular de la concesión a la que se refiere el párrafo anterior será a su vez asumida íntegra y solidariamente por todas y cada una de las empresas agrupadas.

Esta responsabilidad solidaria conjunta de las empresas agrupadas adjudicatarias con la sociedad titular de la concesión, únicamente estará vigente hasta transcurridos dos años desde la fecha del acta final de comprobación de las obras.

Los estatutos por los que se regirá la sociedad titular de la concesión recogerán, además de las cláusulas generales establecidas en la normativa aplicable a las sociedades de capital y las que figuren en la oferta del concesionario, las previsiones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los términos siguientes:

- a) El objeto social deberá coincidir con el objeto del contrato.
- b) La sociedad titular de la concesión no podrá disolverse hasta que se produzca la reversión de la obra mediante la entrega de esta al HUP, levantándose por la Administración la correspondiente acta.
- c) El capital social representará un mínimo del 20% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico, IVA excluido. El capital social deberá ser íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad concesionaria.
- d) El capital social se incrementará para mantener el porcentaje indicado cuando se produzca una inversión mayor que la determinada en el presupuesto de la inversión ofertada.
- e) En los estatutos de la sociedad titular de la concesión se fijará, de forma expresa, la obligación de ampliar el capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido el patrimonio contable a la mitad del capital social, a fin de evitar la causa de disolución prevista en el artículo 360.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- f) Las acciones/participaciones de la sociedad titular de la concesión serán nominativas sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el tiempo que dure la concesión.
- g) La transmisión de acciones/participaciones de la sociedad por cualquier título, cualquier operación que pueda suponer un cambio en la titularidad del accionariado, o modificación en el control efectivo en la sociedad titular de la concesión, así como la constitución de derechos reales limitativos sobre las acciones, deberá ser notificada y autorizada previamente por la Administración. Esta notificación comprenderá los elementos esenciales de la operación, como mínimo, la identificación de las acciones que se transmiten, el negocio jurídico por el que se articula la transmisión y la identificación del adquirente.
- h) Se exceptúan de lo anterior aquellas variaciones del accionariado que se deriven de la ejecución por parte de un acreedor pignoraticio de la garantía constituida sobre las acciones de la Sociedad, una vez autorizada por la Administración con la constitución de la garantía.
- i) La obtención de financiación ajena por la sociedad titular de la concesión se sujetará a lo establecido en los artículos 271 a 277 de la LCSP.
- j) Los créditos concedidos por los accionistas a la sociedad tendrán, en todo caso, la condición de subordinados respecto del total de recursos ajenos de la sociedad, en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los efectos civiles y mercantiles.
- k) El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración.
- l) El ejercicio social coincidirá con el año natural.
- m) Los socios fundadores no tendrán ninguna ventaja ni derecho especial.

- n) La sociedad deberá someter sus cuentas anuales a la verificación de una firma de auditoría de reconocido prestigio en España, durante todo el periodo de vigencia del contrato en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y la normativa contable aplicable.
- o) La sociedad titular de la concesión entregará a la CPCA toda la información justificativa del cumplimiento de lo previsto en el presente apartado.

5.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

En la ejecución de las obras, las facultades del responsable del contrato en la fase de obra serán ejercidas por la Dirección Económica Administrativa del Hospital Universitario de Torrecárdenas conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP y en la fase de explotación serán ejercidas por la Dirección Económica Administrativa del Hospital Universitario de Torrecárdenas. Asimismo, con arreglo a lo previsto en el artículo 62.3 de la LCSP para la concesión la administración deberá además designar una persona que actúe en defensa del interés general para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio. Deberá también velar por los derechos de las personas usuarias, estableciendo un sistema de sugerencias y quejas que habilite a los usuarios para formularlas ante el contratista o el responsable del contrato. En este contrato se designa como Unidad encargada de la defensa del interés general a la Subdirección de los servicios Generales del Hospital Universitario de Torrecárdenas.

II .LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, dirección: <https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html> incluirá los datos, documentos e información a que se refieren el artículo 63 de la LCSP, el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, y artículo 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (BOJA nº 123 de 23 de junio).

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

7. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS:

Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición, así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de Prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverán el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la concreción adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales.

Quienes concurren individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad de propósito específico que será la titular de la concesión.

Para las empresas comunitarias y no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP, respectivamente.

7.2. Unión Temporal De Empresas:

Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos, frente al órgano de contratación.

Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera individualizada una declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), conforme al modelo **ANEXO V DEL PCAP**. Asimismo, deberán aportar el compromiso de constituir la unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, conforme al modelo **ANEXO IV DEL PCAP**, en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurren en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras y los últimos su solvencia económica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando la adjudicación de un contrato financiado con cargo a los fondos europeos recaiga sobre varias personas licitadoras que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en una unión temporal en caso de ser adjudicataria, el plazo para presentar la documentación relativa a la constitución de dicha unión o sociedad, no podrá ser superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación.

7.3 Consultas al mercado o preliminares:

No se han realizado consultas preliminares al mercado en el sentido indicado en el artículo 115 de la LCSP.

7.4 Medidas contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses

Conforme al apartado Séptimo de la Instrucción 2/2022 de la Dirección General de Contratación en relación con los contratos públicos financiados con Fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 27 de abril de 2022 el Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, PMA). Conforme a ello, tanto en fase de preparación, como en las siguientes fases correspondientes a este expediente, este órgano de contratación acredita la existencia de un Plan de Medidas Antifraude, que comprende las medidas de prevención, detección, corrección y persecución apropiadas.

Se hace referencia expresa desde este Órgano de Contratación a la obligatoria aplicación del PMA al contrato resultante de este expediente.

De la misma manera, conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su artículo 6.4, se configuran como actuaciones obligatorias para este órgano gestor, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses, incorporándose estas al Expediente Administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 6.4 de la Orden HPF/1030/2021, todas las personas que participen en el procedimiento de licitación y en la ejecución y el desarrollo de la misma deberán cumplimentar una DACI con-forme al modelo que se incorpora como **ANEXO XII (A-B-C)**, como medida de detección de posibles conflictos de intereses al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación pública.

Esta obligatoriedad de cumplimentar la DACI por todas las personas intervinientes y obligadas a ello, incluye también la del contratista y subcontratista (**ANEXO XII-C**).

7.5 condiciones especiales de compatibilidad.

Al ser una concesión de obra de iniciativa privada, en cumplimiento de los artículos 247 y 248 de la LCSP, se ha sometido a información pública durante un mes el estudio de viabilidad aportado por las empresas “AUSSA APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A.,” y el Anteproyecto redactado por la Administración, sin que se hubieran recibido alegaciones al mismo, tal como se ha indicado en la cláusula 2.1.3. del presente pliego. Asimismo, ambos documentos forman parte de la licitación tras la toma en consideración de los mismos por mediante Resolución de fecha 3 de abril de 2025.

Con estas medidas se garantiza que las posibles licitadoras concurren en igualdad de condiciones.

7.6 Garantía provisional:

En el presente contrato no se exige garantía provisional tal y como se establece en el **apartado 9 del Cuadro Resumen**.

8. LICITACIÓN

8.1. Documentación:

Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa o al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero si fuera necesario pedir aclaración sobre la documentación, información o contenido de la oferta o si hubiere que corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la

misma, al amparo de lo establecido en el artículo 95 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de tres días naturales, respetando siempre el principio de igualdad.

Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones.

8.2. Medios, Plazo Y Forma De Presentación

8.2.1. Medios y plazo de presentación

Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones **únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica**, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del Servicio Andaluz de Salud y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles personas interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los efectos de poder formular una oferta que sea válida.

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por el interesado.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.

8.2.2. Forma de presentación.

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los números 1, 2 y 3:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Sobre electrónico n.º 1: | « Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos». |
| Sobre electrónico n.º 2: | «Documentación técnica para valoración mediante criterios de adjudicación de adjudicación no automáticos o valorados mediante un juicio de valor». |
| Sobre electrónico n.º 3: | «Oferta económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación automáticos o evaluables mediante la aplicación de fórmulas». |

Con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. Previa-mente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad.

8.3 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1)

8.3.1. Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el **sobre electrónico n.º 1** se detallan a continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación conforme a las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

A. Datos básicos de la persona licitadora.

Conforme al **ANEXO I** del presente pliego.

B. Declaración responsable (DEUC).

Una **declaración responsable** en el formato del **Documento Europeo Único de Contratación** (en adelante DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme **ANEXO V del PCAP** y que, así mismo, podrá descargarse del siguiente enlace: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/esp-d-web/fil-ter?lang=> es como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de licitación, incluida la de no estar incurso en prohibición de contratar y cumplir los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

La persona licitadora cumplimentará la sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC (**apartado 4.4 del Cuadro Resumen**).

La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de resultar adjudicataria y no presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ Formas de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en esta situación, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación o que presentando distintas proposiciones, concurren en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación.

Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá coincidir con la indicada en SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

C. Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de la persona sub-contratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por separado en relación a dicha persona subcontratista.

D. En todos los supuestos en que varias empresas concurren agrupadas en Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE) se estará a lo previsto en la cláusula 7.2 del presente pliego, y cada una de las empresas deberá presentar asimismo su DEUC. Además, deberán presentar, conforme al modelo **ANEXO IV de este pliego**, compromiso de constitución de UTE, en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

E. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al DEUC.

La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.

F. Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora, formalizándose el **ANEXO VI del presente pliego**.

G. Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) cumplimentado conforme al **ANEXO XII-C del presente pliego**.

H. Los licitadores que vayan a constituir una sociedad titular de la concesión deberán aportar documento de compromiso de constitución de la misma. La constitución y, en su caso, la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca la correspondiente legislación específica, en su caso. La sociedad concesionaria tendrá las características especiales que se indican en la cláusula 4 del presente pliego.

En el compromiso a presentar deberá indicarse:

- La relación de promotores de la futura sociedad concesionaria,
- Características de las mismas tanto jurídicas como financieras.
- Que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad establecido en el pliego, de conformidad con la normativa aplicable.

8.3.2. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La persona licitadora deberá presentar la documentación requerida en el plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión podrá presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. Si dichas medidas se consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento.

Una vez calificada esta documentación por la mesa de contratación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 141.2 de la LCSP, cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días naturales al empresario para que los corrija.

8.4. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA (SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 2 y 3).

La documentación económica y técnica se presentará en sobres electrónicos independientes, identificados conforme dispone la **cláusula 8.2.2.** Al establecerse criterios de valoración evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, así como criterios evaluables mediante un juicio de valor, la documentación técnica se presentará de modo que los aspectos de la misma que permitan su valoración conforme a criterios de evaluación automática figuren de modo separado a aquellos otros que deban ser valorados conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor.

La documentación técnica debe dar respuesta tanto a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas como a los criterios de adjudicación no automáticos y automáticos que forman parte del PCAP.

8.4.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICOS (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2).

Se incluirá la documentación que deberá ser valorada mediante criterios de evaluación no automáticos, además del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes para la ejecución (**apartado 16 del Cuadro Resumen**).

Se deberán presentar los documentos sellados y firmados junto con índice de todos ellos. En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre electrónico nº 3.

El índice y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica para los criterios de valoración no automáticos se elaborará según el modelo **ANEXO II**.

Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el presente pliego, en cuanto a la inclusión en sobres separados de la documentación para su valoración conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor y de aquella documentación susceptible de valoración conforme a criterios de evaluación automática.

Los licitadores deberán presentar una **MEMORIA TÉCNICA**, relativa al proyecto de ejecución objeto de esta licitación.

Esta **MEMORIA TÉCNICA** recogerá los apartados descritos en el apartado 1 de la **cláusula 9.3.4** de Criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor no valorables en cifras o porcentajes.

A continuación, se detalla el índice de documentos y extensión que debe cumplir:

1. Propuesta Técnica de la ejecución de la obra de construcción.

Extensión máxima 15 folios por ambas caras, (30 páginas). El licitador deberá presentar además al menos 5 paneles en formato A-3 describiendo la solución adoptada.

2. Solución técnica ofertada para la reordenación de los espacios exteriores y accesos al nuevo Aparcamiento.

Extensión máxima 15 folios por ambas caras (30 páginas).

3. Plan de minimización del impacto de los trabajos de construcción sobre la operativa diaria y los usuarios y trabajadores el hospital.

Extensión máxima de este apartado será de 15 folios por ambas caras (30 páginas).

Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un **máximo de 90 páginas en formato PDF**, (más los 5 paneles adicionales) que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará cara a cara, de forma que, si la impresión se realiza a una cara, el número máximo de formatos A4 será 90, y si la impresión se realiza a dos caras, el número máximo de formatos A4 será 45. Es decir, que el número máximo de caras impresas será de 90 en cualquier caso, tanto si la impresión se realiza a una cara como si se realiza a dos caras.

El incumplimiento de la obligación de emplear hasta un máximo de 90 páginas en formato PDF en la Memoria por parte de los licitadores será causa de la no valoración de la misma.

No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 formatos A4 o A3 doblados en tamaño A4.

8.4.2. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3).

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática integrará el **Sobre Electrónico nº 3**, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios de adjudicación, definidos el apartado 2 de la **cláusula 9.3.4**. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.

Se incluirá un índice y resumen de la documentación relativa a la oferta económica y técnica para los criterios de valoración automáticos que se elaborará según el modelo **ANEXO III**.

Se incluirá la oferta de criterios evaluables en cifras o porcentajes, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el **ANEXO X** al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase

concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de las proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

- El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

En caso de que el licitador fuera una UTE, la proposición económica deberá firmarse por todos y cada uno de los representantes de las diferentes personas jurídicas que componen la UTE.

En el supuesto de que la UTE estuviera compuesta por alguna persona física, deberá ésta igualmente firmar la proposición económica junto con el resto de representantes de las empresas intervinientes.

Si todos los componentes de la UTE son personas físicas, la proposición económica deberá ir firmada por todos ellos.

- Si las personas licitadoras tuvieran previsto subcontractar parte del objeto del contrato, deberán indicar en la oferta económica (Anexo X del presente pliego) la parte del contrato que tengan previsto subcontractar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

Los licitadores deberán presentar un PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO que permita justificar la viabilidad económica- financiera de la oferta.

A) EL PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO incluirá los siguientes documentos en soporte digital:

I. Descripción de la explotación del Servicio.

II. Memoria justificativa de la viabilidad financiera de la oferta, especificando estimación de demanda anual, costes estimados de inversión y explotación, puestos de trabajo, con especial mención a la fórmula de amortización prevista de las obras referidas al plazo concesional, entendiéndose que las inversiones han de quedar totalmente amortizadas a la conclusión de la concesión. A tal fin el licitador deberá aportar en soporte informático y documental la estimación del Plan Económico Financiero de su oferta durante el plazo de vigencia del contrato señalado en la misma. Para poder evaluar las ofertas de forma objetiva los licitadores deberán utilizar los valores que a continuación se definen para ciertas variables del modelo económico-financiero:

- Inflación prevista
- Tasa efectiva del impuesto sobre sociedades:
- Fondo de reversión: plazo igual al número de años de vigencia de la concesión definido por el licitador en su oferta.
- Los licitadores deberán aportar cartas de compromiso de financiación de la inversión emitidas por entidades financieras de reconocida solvencia o declaración de si la financiación se realiza por medio propios.
- Análisis de solvencia y rentabilidad de la sociedad concesionaria, que incluirá la Tasa Interna de Retorno (TIR).

III. Modelo económico financiero detallado en Excel, conforme a las variables base aquí definidas y aquellas otras que defina el licitador. Este modelo servirá para una vez iniciada la explotación hacer el seguimiento del rendimiento económico-financiero de la concesión. El licitador deberá aportar la herramienta Excel con el modelo en su oferta, correctamente presentada, detallada y explicada.

Los licitadores deberán realizar sus propios estudios de demanda.

En el modelo quedarán perfectamente definidos los parámetros establecidos en el bloque 2 de los criterios de evaluación. Además, debe desglosarse detalladamente la composición de los gastos generales.

B) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Extensión máxima de este apartado será de 3 folios por ambas caras (6 páginas), más el diagrama de Gantt tamaño DIN_A3, en una cara.

1.2.a) Programa de trabajo mediante un Diagrama de Gantt

Se valorará en función del grado de detalle en la descomposición de las distintas unidades, de su coherencia con el procedimiento constructivo descrito y su adaptación y flexibilidad a los distintos condicionantes externos que pueden afectar directamente al plazo de ejecución de las obras. El licitador deberá aportar un programa de trabajo **ANEXO IX**, mediante un diagrama de Gantt, de modo que el plazo total de la obra sea, como máximo, el reseñado en el Anexo I, con determinación de los plazos parciales, si hubiera recepciones parciales y de modo que contenga las actividades previstas con su duración en días, señalando las unidades consideradas críticas. El programa deberá ser acompañado de un programa económico de la ejecución de obra prevista (en porcentajes, no en importes) y detallado por meses. Se valorará la comprensión del método para la determinación de la duración, rendimientos y equipos de trabajo.

1.2.b) Memoria descriptiva del Programa de Ejecución de las obras

Memoria descriptiva del Programa de Ejecución de las obras, coherente con el programa en diagrama de Gantt, que ponga de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos establecidos por el contratista.

8.5. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITADORA A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO.

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona licitadora del contenido de las cláusulas de este pliego y del PPT, sin salvedad o reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

8.6. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración **a incluir en cada sobre electrónico**, conforme al **ANEXO XI del presente pliego**, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
- c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

8.7. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS:

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de los plazos legalmente previstos las personas licitadoras tendrán derecho a retirar su proposición.

9. ADJUDICACIÓN

9.1. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS 1 Y 2.

9.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una Mesa de Contratación.

Tras la apertura del **sobre electrónico n.º 1**, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación que proceda a través del SIREC-Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente se reunirá la mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos.

9.1.2. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº 1, se procederá a la apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres electrónicos que componen la proposición.

9.1.3. En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico nº 2), cuyo contenido será remitido al servicio dependiente del órgano de contratación que corresponda para la emisión de un informe técnico.

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado.

9.2. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, SOBRE ELECTRÓNICO 3.

9.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la mesa de contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios de evaluación automática (documentación económica y, en su caso, documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automática (sobre electrónico n.º 3)).

La mesa de contratación podrá solicitar a los operadores económicos que “presenten, completen, aclaren o añadan la información o documentación pertinente” cuando la que se presente sea o parezca incompleta o errónea a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la documentación pre-sentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

9.2.2. La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP

9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

9.3.1 El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

En virtud de lo dispuesto en la LCSP, respecto a los criterios de adjudicación, se atenderá a más de un criterio, en virtud de lo previsto en el artículo 145.3 e) de la LCSP. La adjudicación recaerá en el licitador que haga la proposición más ventajosa en su conjunto, de acuerdo con los criterios señalados en el presente documento, sin atender exclusivamente al precio de la misma, primando la calidad en la previsión de la construcción, el modelo de explotación de la planta propuesto para el periodo de transición y la planificación de futuro con la que se cuente.

9.3.2 La presente licitación surge a partir de lo previsto en el artículo 247.5 de la LCSP, que literalmente dispone:

“Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio. En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por cien como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado en función de los que resulten justificados por quien haya presentado el estudio.”

Considerando lo expuesto anteriormente, durante el procedimiento de licitación, la entidad Aussa. S.A. tendrá derecho a obtener 5 puntos porcentuales adicionales a la puntuación obtenida.

9.3.3. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en base a la mejor relación calidad-precio, se tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. La elección de estos criterios queda justificada en el expediente de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP.

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello en las actas de la Mesa de Contratación.

9.3.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.1 de la LCSP, la adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, vinculados al objeto del contrato, en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a los siguientes criterios económicos y cualitativos (hasta un máximo de 100 puntos) que serán los siguientes:

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (De 0 a 45 PUNTOS)

La documentación correspondiente deberá incluirse en el **Sobre Electrónico nº 2** (documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor).

La puntuación para cada criterio evaluable mediante juicio de valor se asignará realizando una comparativa entre las ofertas presentadas por todos los licitadores, otorgando la máxima puntuación a la oferta motivadamente más ventajosa respecto del resto y valorando las restantes ofertas en relación comparativa a la que obtenga la máxima puntuación, justificándose en el informe técnico el diferencial de la puntuación otorgada.

Con el criterio no automático de memoria técnica de la concesión, donde se incluyen las características de la construcción y de la explotación y mantenimiento del aparcamiento, se busca que la calidad de la construcción sea óptima, lo que redundará en una mayor durabilidad y seguridad del mismo, así como que la explotación del aparcamiento se preste con las tecnología más avanzada, lo que redundará directamente en la calidad de la prestación sanitaria, al permitir un acceso más cómodo y rápido a las prestaciones sanitarias del Hospital.

1.1. Memoria explicativa de la Propuesta técnica de ejecución, solución técnica de reordenación de espacios y propuesta técnica de gestión (de 0 a 45 puntos):

Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la aportación de la documentación que se indica en cada caso.

1.Criterios de adjudicación no valorables en cifras y porcentajes:	Puntos (45)
CONCEPTO	Máxima
1.1. Propuesta técnica de la ejecución de la obra construcción	25
1.2. Solución técnica de para reordenación de los espacios	10
1.3. Propuesta técnica de gestión de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras	10

Criterios de valoración.

No se puntuará cada concepto, cuando la memoria no contenga la justificación correspondiente de cada apartado Reseñado.

1.1. Propuesta Técnica de la ejecución de la obra de construcción (Máximo 25 puntos). Contendrá al menos la siguiente documentación:

Memoria descriptiva de los trabajos de redacción de Proyecto de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio y el Aparcamiento conforme al Anteproyecto. Extensión máxima 15 folios por ambas caras, (30 páginas)

El licitador deberá presentar además al menos 5 paneles en formato A-3 describiendo la solución adoptada, lo que incluirá detalles gráficos y visuales de todos los aspectos técnicos clave de la solución, tales como calidades a utilizar, proceso de ejecución, impacto visual del nuevo edificio, conectividad con el resto del complejo hospitalario, nuevos accesos al edificio y al aparcamiento, afección de las obras, reordenación de espacios exteriores, etc.

Se valorará el análisis de los siguientes apartados, conforme a su nivel de definición, detalle y coherencia, referidos a cada obra en concreto de manera concisa y particularizada, y de acuerdo a los siguientes su criterios y puntuación. (Máximo 20 puntos)

1.1.a) Conocimiento del proyecto, del entorno y antecedentes (Máximo 3 puntos).

Se valorará la descripción concisa de la obra a ejecutar, con referencia a los antecedentes jurídicos y urbanísticos de la parcela y del proyecto de ejecución, analizando la situación actual del entorno desde un punto de vista que motive o justifique la ejecución de las obras propuestas.

1.1.b) Conocimiento del ámbito de actuación. Condicionantes (Máximo 6 puntos).

Se valorará el estudio de la parcela donde se ejecutará la obra, a nivel técnico y estudio de los condicionantes existentes, identificando las posibles afecciones que la ejecución de la obra pueda ocasionar al entorno, incluso con aportación de soluciones a las mismas. Se valorará el estudio concreto de la accesibilidad peatonal y ordenación tráfico, planteando soluciones concretas a las posibles afecciones que la ejecución de la obra ocasionará.

1.1.c) Análisis de las soluciones constructivas proyectadas, crítica constructiva y posible optimización (máximo 6 puntos).

Se valorará en este apartado el estudio de las soluciones constructivas planteadas en proyecto, describiendo concisamente y de manera cronológica el proceso constructivo de la obra, de tal manera que demuestre el estudio del mismo, valorándose las posibles críticas, optimizaciones y aportaciones que tras el estudio del entorno y del proyecto pudieran encontrarse.

1.1.d) Procedimiento operativo de la obra civil (máximo 6 puntos).

Se presentará una memoria técnica del procedimiento constructivo.
Se valorará el detalle con el que se describan los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra reflejando con un planteamiento correcto, cronológico, coherente y realista el conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas. Se valorará el estudio de la implantación de la obra.

Se valorará la exhaustiva descripción de la organización de recursos que se adscribirán a la obra de referencia. Se valorará la relación de medios y elementos de salud y seguridad en el trabajo que el contratista se compromete, a su costa, a poner a disposición de la obra y que suponga una mejora de las condiciones de salud y seguridad laboral con relación a las previsiones recogidas en su caso, en el Estudio

de Seguridad y Salud o con lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia, indicando el número y características de dichos medios y su comparación con los exigidos obligatoriamente.

1.1.e) Plan de control de Ensayos (Máximo 2 punto)

Se valorará que sea una descripción concreta del plan de aseguramiento de la calidad concretizado para la obra que nos ocupa. Con descripción detallada de los materiales y actividades objeto de control, con aportación de un plan de control de ensayos a realizar durante la ejecución de la obra civil.

1.1.f) Medidas de control e Inspección (Máximo 2 puntos)

Se valorará el análisis y estudio de las medidas de inspección y control de fabricación, suministro y puesta en obra de materiales y equipos.

Adicionalmente concentra:

- I. Cuadro de superficies por planta y total.
- II. Presupuesto de ejecución material detallado por capítulos, con base costes y precios de la construcción de la Junta de Andalucía más recientes.
- III. Presupuesto por cada actuación complementaria.
- IV. Planos a escala. Escala mínima 1:200.
- V. Plano de terminación de cubiertas, indicando la actuación en cada parte de la superficie, los elementos vegetales a trasladar, las zonas de reposición (como mínimo a su estado original), del pavimento, plantaciones, jardines y demás elementos arquitectónicos y urbanísticos del suelo afectados por las actuaciones y obras de construcción del aparcamiento.
- VI. Planos que definan las modificaciones de los servicios existentes en el subsuelo y ejecución de las instalaciones precisas para el desvío provisional durante las obras y reconstrucción definitiva de las líneas, cables, conducciones y demás canalizaciones y servicios afectados por las obras.
- VII. Sistemas de ejecución de los muros perimetrales.

1.2 Solución técnica propuesta de reordenación de los accesos al recinto hospitalario (Máximo 10 puntos)

Extensión máxima 15 folios por ambas caras, (30 páginas)

Se valorará las soluciones propuestas para la reordenación del tráfico en las distintas fases de ejecución de las obras. Se aportará documentación gráfica en la que se identifiquen los desvíos y plazos para su implantación, según la programación propuesta por el ofertante. Se indicarán las actuaciones propuestas relacionadas con la implantación de medidas de información y señalización del viario en los distintos desvíos previstos. Se indicarán las actuaciones previstas, relacionadas con el transporte colectivo que pudiera verse afectado.

Se valorará la solución propuesta para la reurbanización de los espacios afectados por las obras, tanto en lo referente a su reordenación como a la correcta definición de los materiales a emplear.

- La solución de espacios exteriores y accesos está completa y bien detallada y se adapta a las necesidades del hospital: **(máximo 3 puntos)**
- La solución tiene en cuenta todos los condicionantes existentes: **(máximo 3 puntos)**
- La solución aporta creatividad y originalidad, a la par que funcionalidad y se adapta a las necesidades del hospital: **(máximo 4 puntos)**

1.3. Propuesta técnica de gestión de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras (Máximo 10 puntos). Extensión máxima de este apartado será de 15 folios por ambas caras (30 páginas)

1.4.a) Oferta de gestión suficientemente bien descrita y completa (Máximo 5 puntos)

▫ Se valorará la idoneidad de la propuesta, en la que el licitador deberá incluir una propuesta de gestión y prestación del servicio, organización de los recursos a utilizar, plan de gestión de servicios adicionales propuestos por el concesionario, planes de contingencias, propuestas tecnológicas que generen valor durante la explotación, así como la implementación de medidas para garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los aparcamientos.

1.4.b) Detalle del Plan Integral de mantenimiento de la infraestructura. (Máximo 5 puntos)

- Se valorará la idoneidad del Plan de mantenimiento integral de la infraestructura y la idoneidad del software de gestión y mantenimiento.
- Se valorará la programación de medidas de mantenimiento preventivo y mejoras en la eficiencia ambiental.
- Se valorará el detalle de la reinversión de las instalaciones de las infraestructuras a lo largo de explotación

En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP:

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren presentado dándoles un plazo suficiente, para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la oferta resulta inviable por incluir valores anormales se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la normativa de subcontratación o no cumplieren con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (DE 0 A 55 PUNTOS).

La documentación correspondiente deberá incluirse en Sobre Electrónico nº 3 (Oferta económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas).

La documentación correspondiente deberá incluirse en **Sobre Electrónico nº 3** (Oferta económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas).

2. Criterios de adjudicación evaluables de forma automática	55
Evaluación de la propuesta de explotación del aparcamiento:	
2.1. Plazo y programa de ejecución de las obras de construcción del conjunto. Máximo 39 semanas. Ofertar a la Baja.	5
2.2 Tarifa de rotación ofertada por estancia: máximo 2€ /24 Hora (IVA No incluido), ofertar a la baja	20
2.3 Tarifa de abono general (30 días/24 horas) para usuarios del hospital: Máximo 30€/mes (IVA NO incluido). Ofertar a la baja.	10
2.4 Tarifa de abono mensual para trabajadores del hospital: máximo 30€/mes (IVA NO incluido), ofertar a la baja.	20

Los criterios de adjudicación evaluables de forma automática se han establecido para valorar las ofertas con relación a su calidad-precio, y se asignarán aplicando la fórmula de cálculo establecida para cada uno de los criterios.

La reducción del plazo de ejecución fomenta la agilidad en la realización de la obra y minimiza el impacto en el entorno hospitalario. Este criterio incentiva la planificación de forma eficiente de los recursos destinados al proyecto y a garantizar la entrega de la infraestructura en el menor tiempo posible, optimizando la relación coste-tiempo y beneficiando la continuidad asistencial.

La reducción de la tarifa por estancia redundará en un menor coste para los usuarios, reforzando la accesibilidad económica para estos y contribuye a una prestación de servicio más competitiva. Con este criterio, se incentiva la propuesta de ofertas que disminuyan los costes directos para el usuario final, fomentando a la vez la eficiencia y el uso racional de los recursos a lo largo de la concesión, aspectos que mejoraran la satisfacción de los usuarios, lo que repercutirá en que mejore su percepción de la calidad del servicio sanitario prestado.

La reducción de la tarifa para abonos generales promueve la fidelización de los usuarios que requieren un uso continuado del servicio y garantiza un coste más ajustado para dichos perfiles. Este criterio se justifica al buscar un equilibrio entre la rentabilidad de la concesión y la accesibilidad económica de aquellos usuarios que tengan la necesidad de hacer un uso frecuente del aparcamiento.

La reducción de la tarifa para abonos dirigidos a trabajadores del Hospital y empresas contratadas potencia el bienestar del personal que presta servicios en el recinto, fomentando su compromiso y favoreciendo una operación más fluida. Este criterio responde a la necesidad de ofrecer condiciones ventajosas a quienes requieren un acceso continuo, contribuyendo además a mejorar la movilidad y organización interna.

2.1 Reducción del plazo de ejecución de la obra: hasta 5 puntos

Si no se oferta reducción del plazo de ejecución u oferta una cantidad en días de reducción de este inferior a una semana, se le concederá 0 puntos.

Al resto de ofertas se le asignará 1 punto por cada dos semanas de reducción ofertada que venga a reducir las 39 semanas recogidas en el PPT para la ejecución de la obra, según la siguiente escala:

Reducción ofertada	Puntos
hasta 2 semanas	1,0
hasta 4 semanas	2,0
hasta 6 semanas	3,0
hasta 8 semanas	5,0
10 o más semanas	5,0

Solo se podrán ofertar semanas completas. Si se ofertara alguna cantidad de días o fracciones de semanas, solo se tendrá en consideración el número de semanas completas incluidas, desechándose los días o fracciones de semana ofertados que no supongan una semana completa. Se aportará una declaración responsable donde se recoja el número de semanas de reducción de plazo ofertadas (anexo XV al PCAP).

2.2 Reducción de la tarifa por estancia: hasta 20 puntos

Si no oferta reducción de tarifa o la reducción es inferior a 0,10 € (cinco céntimos) se le asignará 0 puntos.

Al resto de ofertas se le asignarán puntos, siguiendo la siguiente escala:

Reducción ofertada	Puntos
0,10 €	2,00
0,20 €	4,00
0,25 €	6,00
0,30 €	8,00
0,35 €	10,00
0,40 €	12,00
0,55 €	14,00
0,50 €	15,00
0,55 €	18,00
0,60 € o más	20,00

Solo se podrá ofertar cantidades múltiplos de 0,05 € (cinco céntimos). Si se ofertara alguna cantidad que no fuera múltiplo, se redondeará a la baja hasta el valor de la escala correspondiente.

2.3 Reducción de la tarifa por abono general: hasta 10 puntos

Se calculará sobre la oferta del abono mensual.

Si no oferta reducción de tarifa o esta es inferior a 3,00 € (tres euros) se le asignará 0 puntos.

Al resto de ofertas se le asignarán puntos, siguiendo la siguiente escala:

Reducción ofertada	Puntos
3,00 €	2,0
3,50 €	2,5
4,00 €	4,0
4,50 €	4,5
5,00 €	6,0
5,50 €	6,5
6,00 €	8,0
6,50 €	8,5
7 € o más	10,0

Solo se podrá ofertar cantidades exactas coincidentes con la escala de reducción. Si se ofertara alguna cantidad diferente, se redondeará a la baja hasta el valor de la escala correspondiente.

2.4 Reducción de la tarifa por abonos a trabajadores del Hospital y empresas contratadas: hasta 20 puntos

Se calculará sobre la oferta del abono mensual.

Si no oferta reducción de tarifa o esta es inferior al 10% se le asignará 0 puntos.

Al resto de ofertas se le asignarán puntos, siguiendo la siguiente escala:

Reducción ofertada	Puntos
10%	2,0
15%	5,0
20%	10,0
25%	15,0
30% o más	20,0

Solo se podrá ofertar cantidades exactas coincidentes con la escala de reducción. Si se ofertara alguna cantidad diferente, se redondeará a la baja hasta el valor de la escala correspondiente.

- CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN:

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR(DE 0 A 40 PUNTOS):(Sobre Electrónico nº 2)		45
1.1 Propuesta técnica de la ejecución de la obra construcción	25	
1.2 Solución técnica de para reordenación de los espacios	10	
1.3 Propuesta técnica de gestión de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras	10	
2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS:(Sobre Electrónico nº 3)		55
Evaluación de la propuesta de explotación del aparcamiento:		
2.1. Plazo y programa de ejecución de las obras de construcción del conjunto. Máximo 39 semanas. Ofertar a la Baja.	5	
2.2 Tarifa de rotación ofertada por estancia: máximo2€ /24Horas(IVA No incluido), ofertar a la baja	20	
2.3 Tarifa de abono general (30días/24 horas) para usuarios del hospital: Máximo 30€/mes (IVA NO incluido). Ofertar a la baja.	10	
2.4 Tarifa de abono mensual para trabajadores del hospital: máximo 30€/mes (IVA NO incluido), ofertar a la baja.	20	
PUNTUACIÓN TOTAL		100

9.4 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del procedimiento de licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.

Dado que se utilizan una pluralidad de criterios, los parámetros objetivos que permitan a la mesa de contratación identificar los casos en que una oferta se encuentre incurso en presunción de anormalidad, son los siguientes:

- En caso de que haya un solo licitador, su oferta se considerará incurso en presunción de anormalidad, si el importe de baja ofertado para la tarifa de estancia es superior a 0,45 €, pues se pondría en riesgo el equilibrio económico del contrato.
- En caso de que concurren dos o más licitadores, una oferta se considerará incurso en presunción de anormalidad, si se desvía en un 25 por ciento o más al alza sobre el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas por todas las ofertas admitidas, teniendo en cuenta todos los criterios de valoración considerados para adjudicar el expediente.

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que las hubieren presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente, la bajada ofertada de la tarifa por estancia, o de costes o cualquier otro parámetros en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC- Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa puede solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, lo que le permitirá elevar al órgano de contratación una propuesta motivada de aceptación o rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de contratación considere que la oferta resulta inviable por incluir valores anormales, se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.

En todo caso, se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por vulnerar la normativa de subcontratación o no cumplieren con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Se entenderá, en todo caso, que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de las tarifas o costes propuestos por el licitador, cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP.

9.5 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

9.5.1. Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente de puntuación.

9.5.2. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, si se apreciase indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se estará al procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.

9.5.3. Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP y, en vista de su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo artículo.

9.5.4 Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la proposición que contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio. En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase admisible ninguna de las ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la persona licitadora propuesta frente a la Administración, no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión.

9.5.5. Preferencia en la adjudicación en caso de empate.

En caso de empate, los criterios específicos para el desempate serán por orden de prioridad los siguientes:

- a)** Propositiones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
- b)** Propositiones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.

c) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

9.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

9.6.1. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá por medios electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica la documentación acreditativa: de la capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, solvencia económica-financiera, técnica-profesional, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

9.6.2. Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

- Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona propuesta adjudicataria, y en su caso de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:

La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa requerida a la persona propuesta como adjudicataria.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

La documentación a requerir, y presentar por el licitador propuesto es la siguiente:

1) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta adjudicataria, como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será la copia electrónica del D.N.I., si se trata de persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación administrativa requerida a la persona propuesta como adjudicataria.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando la adjudicación de un contrato financiado con cargo a los fondos europeos recaiga sobre varias personas licitadoras que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en una unión temporal en caso de ser adjudicataria, el plazo para presentar la documentación relativa a la constitución de dicha unión o sociedad, no podrá ser superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP.

2) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente Registro oficial. Los poderes deberán ser bastanteados por un Letrado de la Administración Pública.

3) Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición.

4) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En caso de no presentar dicha documentación, se entenderá autorizada la administración para el acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación.

-Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: copia electrónica, sea auténtica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y último recibo o, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

5) Requisitos mínimos de solvencia económica, financiera y técnica y/o, en su caso, clasificación, conforme a los artículos 87 y 88 de la LCSP.

SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL:

Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros deberán justificar su solvencia económica y financiera de acuerdo con la naturaleza y objeto del presente contrato, conforme a los criterios de selección fijados en función de los medios de acreditación que a continuación se determinan, siendo **acumulativa** la acreditación presentada en el caso de agrupaciones de empresas que se presenten, con la obligación en su momento de constituir una sociedad concesionaria ex profeso para esta concesión:

- Acreditación de la Solvencia económica y financiera:

Conforme al artículo 87 de la LCSP, a fin de acreditar la solvencia económica y financiera, la empresa licitadora deberá presentar una declaración sobre el volumen anual de negocios más elevado dentro de los últimos tres años concluidos, que deberá ser, como **mínimo, del 25% del valor estimado del contrato que se pretende adjudicar.**

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, correspondientes a los tres últimos ejercicios en ambos casos. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil de los últimos tres ejercicios.

Se ha fijado un umbral que permite garantizar al mismo tiempo una solvencia suficiente por parte del licitador interesado en el contrato y un acceso no restrictivo de la licitación.

- Acreditación de la Solvencia técnica o profesional:

En relación con la actividad de explotación, acreditación de la participación en los últimos 3 años, en la **GESTIÓN ANUAL DE UN MÍNIMO DE 1200 PLAZAS EN APARCAMIENTO**, debiendo acreditarse con la presentación de un certificado de buena ejecución mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector y cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación (Copia del (de los) contrato(s) u otra documentación acreditativa de la prestación del servicio.; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Los citados certificados no podrán ser en número inferior a dos, y deberán especificar un objeto análogo a este contrato.

Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, deberán acreditar la solvencia técnica si no tienen actualizado dicho Registro.

De acuerdo con la LCSP, se han elegido unos requisitos acordes con el objeto del servicio, como son la experiencia de la empresa en contratos similares y la gestión adecuada de la calidad en los trabajos que se ejecuten. Ambos requisitos parecen suficientes para tener una cierta garantía de que el licitador tiene las capacidades necesarias para llevar a cabo el contrato, y no se ha visto necesario añadir otros requisitos que la LCSP señala como posibles.

Esta exigencia responde de manera adecuada al objeto del contrato, sin llegar a resultar restrictiva la exigencia para los licitadores. Tres servicios similares al del objeto del contrato realizados es una cantidad asumible, al mismo tiempo que demuestra experiencia real para el objeto del contrato.

Adicionalmente a la solvencia exigida y de acuerdo con lo establecido en el art 76 de la LCSP, los licitadores deberán presentar declaración responsable del compromiso de adscribir o dedicar a la ejecución del contrato los medios personales necesarios para su ejecución, aportando en el sobre nº1 de documentación administrativa, los documentos siguientes:

Compromiso relativo a los medios personales que se adscriban a las diversas prestaciones del contrato.

Los licitadores deberán presentar una declaración en la que contenga que los medios personales para hacer frente a este contrato cuentan con la titulación profesional y experiencia correspondiente a proyectos, obras y servicios de naturaleza análoga, entre los cuales se deberán contar con:

- **Director de explotación**

La persona/s que desarrollen estas funciones se exigirán la acreditación de experiencia de al menos CINCO (5) años en servicios de naturaleza análoga.

A todos los medios personales descritos anteriormente les será de aplicación lo estipulado en el artículo 150.2 de la LCPS.

Para ello, el propuesto como adjudicatario en el plazo establecido en el mencionado artículo deberá acreditar la disponibilidad efectiva de los medios declarados, mediante la siguiente aportación documental:

- Informe en el que se describa el equipo directivo que se va a dedicar con exclusividad total al contrato, con el curriculum vitae de cada uno de ellos

6) Certificación expedida por el representante de la persona licitadora que presente la oferta, relativa a que no forma de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá cumplimentarse el modelo ANEXO VIII del presente pliego.

7) Documentación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP. **(ANEXO VII del presente pliego);**

8) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9) Empresas no Comunitarias.

Deberán justificar mediante informe, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil tal y como se recoge en el apartado **27 del Cuadro Resumen.**

10) De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50 o más personas trabajadoras deberán acreditar que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007).

Para acreditar que no concurre la citada causa de prohibición para contratar, la persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá presentar el plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas.

No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción.

Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para que demuestre que, a la fecha del requerimiento efectuado a tal fin, se encuentra en condiciones de cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.

11) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas licitadoras deberán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de personas trabajadoras en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras discapacitadas, su número y porcentaje respecto a ésta.

12) Declaración responsable, de acuerdo al **ANEXO XIII del PCAP**, del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 16.4.3 del PCAP y el apartado 19 del Cuadro Resumen.

13) Documento que acredite haber abonado los gastos efectuados por la redacción del estudio de viabilidad y el anteproyecto, incrementados en un 5% atendiendo al artículo 247.5 de la LCSP, siendo el importe:

CONCEPTO	IMPORTE (IVA NO INC.)
Estudio de demanda	8.445,00 €
Análisis técnico-jurídico	3.400,00 €
Levantamiento topográfico	2.600,00€
Redacción anteproyecto	13.189,18 €
Costes salariales (AUSSA)	9.366.51 €
Total (sin IVA)	37.010,69 €
IVA	7.772,24 €
Total (con IVA)	44.782,93 €

Si resulta adjudicataria la entidad APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S. A. (AUSSA) dichos gastos se entenderán ya satisfechos.

En caso contrario, el importe consignado se le abonará a la citada mercantil en concepto de compensación

14) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por la cuantía recogida en la cláusula 9.9 del presente pliego.

9.6.3. Quienes estuviesen inscritos en el **Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma** de Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en materia de Hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa que se exige, siempre que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el mencionado Registro. Para ello deberán aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y declaración expresa responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los datos que obran en el mismo, conforme el anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero.

Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado anexo y se aportará la documentación acreditativa.

Este certificado podrá expedirse electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin perjuicio de que los/as licitadores/as presenten en todo caso la declaración responsable indicada en el apartado anterior.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

9.6.4. Si la persona licitadora presenta la documentación y la mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la persona licitadora concediéndole un plazo de **3 días naturales** para que los corrija o subsane, presentando la documentación que proceda a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentación que se indica en la **cláusula 9.6.1, 9.6.2 o 9.6.3** en el plazo señalado, o tras el plazo de subsanación concedido, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto de ejecución material ofertado, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación a la persona licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otra persona licitadora, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.

9.6.5. Adjudicación.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la cláusula 9.6.2. del presente pliego.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

9.6.6. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, por medios electrónicos debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la LCSP que permita a la licitadora excluida o candidato descartado interponer recurso especial en materia de contratación en los términos establecidos en el art. 44 y siguientes de la LCSP suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica, a la dirección habilitada que las personas licitadoras o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, y se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

9.7 EXISTENCIA DE CRÉDITO

Para las prestaciones de **Concesión de obra para la construcción y explotación de un aparcamiento** no se prevé la existencia de crédito.

9.8. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurrido los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas.

9.9. GARANTÍA DEFINITIVA

-Garantía relativa a la fase de construcción

Deberá presentarse resguardo acreditativo de haber constituido una garantía definitiva a disposición de la Administración por el importe equivalente al 5% del presupuesto ofertado (IVA excluido) del Importe Total de la Inversión, contenido en el plan económico financiero de la oferta del adjudicatario.

- Garantía relativa a la fase de explotación

Finalizada la ejecución de las obras de construcción, y transcurrido el plazo de garantía relativa a la misma, se procederá la devolución del 50 % de la garantía constituida para la fase de construcción de la obra pública. El 50% restante constituirá la garantía definitiva relativa a la fase de explotación y quedará afecta hasta que termine el plazo de la concesión. **Apartado 10 del Cuadro Resumen).**

La garantía definitiva cubrirá los daños generados durante la ejecución del contrato en relación con la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el, demora del contratista, incumplimiento, y los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del contrato. Se incluye la demolición de la construcción por ejecución incompleta o deficiente de la obra contratada.

9.9.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de exigirse su constitución.

9.9.2 Esta garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval o mediante seguro de caución, pero a diferencia de la garantía provisional, el efectivo, el certificado del seguro de caución y el documento de aval deberán depositarse, en todo caso, en alguna de las cajas provinciales de depósito de la consejería competente en materia de hacienda, extremo que se acreditará acompañando el resguardo justificativo.

9.9.3 La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el presente pliego y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

9.9.4 La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.

La constitución de la garantía quedará acreditada con la presentación del resguardo expedido por la Caja General de Depósitos, mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

9.10. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía relativa a la fase de construcción del presente contrato será de **12 MESES** que comenzará a contarse a partir de la recepción de conformidad de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP (**apartado 7.1.3 del Cuadro Resumen**) tiempo suficiente para verificar que no existen vicios en la construcción del aparcamiento ni defecto en los bienes y equipos necesarios para su funcionamiento.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el edificio del aparcamiento o en los bienes y equipos del mismo, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la persona contratista la subsanación de los mismos.

La persona contratista tendrá derecho a conocer y ser oída sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

Terminado el plazo de garantía en la fase de construcción sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP.

9.11. Responsabilidad por vicios ocultos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

9.12 .DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.

a) En la fase de construcción:

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

b) En la fase de explotación:

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

9.13. DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, y conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.

III.- FORMALIZACIÓN

10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

10.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el pliego de cláusulas administrativas particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato.

10.2. Al ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita notificación de la adjudicación por medios electrónicos a las personas licitadoras en la forma prevista en el artículo 153 de la LCSP.

El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

10.3. La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica:

Documento que acredite tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida la anterior obligación si el Contratista acredita tener concertado un Seguro de Responsabilidad Civil.

Dichos seguros serán en los términos establecidos en la **cláusula 17.3** del presente pliego.

- Caso de que la adjudicataria sea una UTE, copia electrónica, sea auténtica o no, de la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será, al menos, coincidente con la del contrato hasta su extinción.
- En el supuesto de que la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento deberá aportar declaración en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

10.4. Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto de ejecución material ofertado, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En dicho caso el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.

10.5 La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del órgano de contratación. Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, se publicará dicho anuncio en el “Diario Oficial de Unión Europea”.

10.6. Serán de cuenta de la persona adjudicataria los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES

11. OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO. Artículos 258 y ssLCSP.

Será obligación del concesionario con independencia de las previstas en el PPT y en la LCSP, la correcta ejecución del proyecto, la realización de las obras y la prestación del servicio, con arreglo a la oferta adjudicada, prescripciones de los presentes Pliegos, normativa general aplicable y órdenes e instrucciones de la administración dadas para la mejor realización del servicio, destacándose en particular lo siguiente:

1. El adjudicatario durante las obras de ejecución de los desvíos de servicios, construcción del aparcamiento y urbanización de cubierta deberá mantener el tráfico rodado en los dos sentidos al menos con un carril para cada uno de ellos.

El adjudicatario está obligado a presentar el Documento Presupuesto tanto del Proyecto Básico como de Ejecución que formará parte de este concurso.

2. Ejecutar el contrato a su riesgo y ventura, (artículo 254 LCSP)

3. Prestar el servicio objeto de la concesión, poniendo para ello en funcionamiento las obras, construcciones e instalaciones que se ceden en el plazo ofertado por el licitador de acuerdo a lo establecido en el PPT, y hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, en el de Prescripciones Técnicas de Gestión

4. Prestar el servicio objeto de concesión en régimen de igualdad para todos los usuarios/as, velando por el mantenimiento de una relación de respeto con el usuario/a y una adecuada satisfacción de sus necesidades a través de la prestación del servicio acordado.

5. Conservar las obras, construcciones e instalaciones cedidas y mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento hasta que, por conclusión de la concesión, deban entregarse con todas las instalaciones que sean inherentes y necesarias al mismo para su adecuada prestación.

6. Contar con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo este Hospital ajeno a dichas relaciones laborales.

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.

El contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada.

7. Responder frente a terceros e indemnizarles por los daños que se les haya causado como consecuencia del funcionamiento del Servicio, salvo que se hubiese producido por actos realizados en cumplimiento de una orden forzosa acordada por la Corporación, con carácter ineludible.

8. No enajenar ni gravar, sin autorización, los bienes e instalaciones de titularidad del concesionario que estén afectos a la prestación del servicio.

9. Ejercer, por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la previa autorización.

10. Asumir y hacer frente a todos aquellos gastos derivados del mantenimiento y conservación de las instalaciones del Servicio, así como de los suministros de energía eléctrica, agua y cualquier otro material que se requieran.

11. Son de cuenta del concesionario los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Igualmente serán de cuenta exclusiva del contratista el pago de todo tipo de impuestos, tasas y gravámenes de cualquier tipo, presentes o futuros, que graven la propiedad y/o gestión y explotación del inmueble. En concreto el concesionario será responsable de abonar el importe del Impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos urbanos correspondientes al aparcamiento subterráneo.

12. Cumplir con las obligaciones en materia de gastos relativas al personal, maquinaria, etc., en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

13. Si del incumplimiento del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado (263 LCSP).

14. La excusa de desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

15. Dispondrá de un Libro de Registro permanentemente actualizado en el que se harán constar las incidencias que se produzcan, debiendo ser comunicadas al Responsable del contrato.

16. Presentar anualmente a la Administración una memoria anual o balance de gestión. Esta memoria anual o balance de gestión habrá de presentarse en el mes de Julio siguiente a la finalización del ejercicio sobre el que se informa. A tal efecto, se exigirá una contabilidad separada para la concesión del Parking, con independencia de la general de la empresa concesionaria.

17. Tendrá expuestas al público los precios de los servicios vigentes en cada momento de forma que sean fácilmente visibles.

18. El contrato se ejecutará con sujeción a los documentos contractuales y demás datos básicos que definan y condicionen el objeto del contrato. Si durante la elaboración de los trabajos, el contratista precisare algún dato no contenido o detallado en los documentos contractuales o información facilitada, deberá solicitarlo a la Administración con la antelación suficiente, de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la Administración, también previa e independiente de la que se libre al Responsable del contrato. Al respecto, se hace constar que el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista.

En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate (261 y ss LCSP).

12.- DERECHOS BÁSICOS DEL CONCESIONARIO. Artículo 257 LCSP

El concesionario tendrá derecho a:

- 1.** El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica.
- 2.** Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la prestación del Servicio.
- 3.** Aquellos que le confiere la LCSP en los artículos que regulan la concesión de obra pública.

13. Financiación privada.

Además del derecho a hipotecar la concesión, el concesionario podrá acogerse a las otras modalidades de financiación privada establecidas en la LCAP, en los términos establecidos en los artículos 271 y 272.

La emisión de obligaciones, bonos u otros títulos deberá ser comunicada al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice, sin que puedan emitirse títulos cuya fecha de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de la concesión. También podrá emitir valores que representen participación en uno o

varios de los derechos de crédito a su favor, tales como el derecho al cobro de las tarifas, ingresos procedentes de la explotación de los elementos comerciales relacionados con la concesión o, en su caso, aportaciones de la Administración. La cesión de estos derechos se formalizará en escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones a efectuar por la Administración, se deberá notificar al órgano de contratación. Estos valores negociables podrán incorporarse a fondos de titulización de activos que se registrarán por su normativa específica y su emisión requerirá autorización administrativa previa del órgano de contratación

A la emisión de valores les resultará de aplicación lo dispuesto en texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Además de los citados medios de financiación privada, el concesionario podrá contratar préstamos o créditos con entidades de crédito, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, debiendo comunicar al órgano de contratación estos contratos en el plazo de un mes desde su suscripción.

El orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de estos preceptos será el orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades Administrativas que, en su caso, con arreglo a lo dispuesto de dichos preceptos, se atribuyen a la Administración concedente, en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

14. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículos 261 y ss LCSP.

Además de los derechos que se deriven de otras cláusulas de los diferentes Pliego, la administración tiene los siguientes derechos y potestades:

- 1.** Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- 2.** Modificar las condiciones de prestación del Servicio por razones de interés público debidamente justificadas. El Órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en la LCSP, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del Plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.
Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se registrará por las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 LCSP.
- 3.** Acordar la resolución del contrato en los casos y en las condiciones que se establecen en la normativa correspondiente.
- 4.** Imponer las penalidades por incumplimiento del concesionario previstas en el artículo 264 LCSP.
- 5.** Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus instalaciones y locales, relacionados con el objeto de la concesión.
- 6.** Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización del Servicio que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda.
- 7.** extinción e intervención de la concesión. De conformidad con el artículo 263 LCSP. Rescatar el servicio público. La administración se reserva el derecho a rescatar el servicio antes de su vencimiento, si lo aconsejaren circunstancias de interés público. Salvo cuando el rescate esté basado en causas imputables al gestor, procederá el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

15. NORMAS COMPLEMENTARIAS

- 1.** La administración se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación de las citadas instalaciones, para comprobar la efectividad de las operaciones de mantenimiento. Si éstas no se realizaran o lo fueran deficientemente, podrán ordenar su ejecución o corrección a cargo del contratista.

2. El concesionario deberá cumplir y hallarse al corriente en todo momento de las obligaciones que como empresas le incumben en materia fiscal, laboral, de seguridad social, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Sindical; siendo estricta y rigurosamente responsable con carácter exclusivo y con entera indemnidad de la administración de cualquiera de tales obligaciones. A los efectos de control por parte de la administración y sin que ello implique no obstante obligación alguna para éste último, el concesionario deberá acreditar siempre que sea requerido por el mismo, tener cumplidas todas las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniendo a disposición, en todo momento, los documentos y comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones.

3. La administración se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de la calidad del servicio prestado. A estos efectos, un técnico de la administración podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, efectuar in situ el control de calidad oportuno, levantando, en su caso, acta de no conformidad, que podrá dar lugar a la resolución del contrato.

4. El Concesionario será responsable de los accidentes que puedan ocurrir a todo el personal y elementos materiales, a los usuarios o terceras personas o sus bienes como consecuencia de la realización de los trabajos encomendados.

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBRA Y EXPLOTACIÓN

16. FORMA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16.1.1 El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación a favor del órgano de contratación.

Con respecto a la Concesión de obras, De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la LCSP, y dado el carácter concesional del contrato, el contratista asumirá el riesgo operacional de la ejecución del contrato.

Además, cuando el plan de viabilidad haya sido incluido en el expediente de contratación, los licitadores deberán revisar las previsiones de ingresos y gastos contenidas en el horizonte temporal para la recuperación de la inversión y obtención de los beneficios previstos, durante el tiempo de duración de la concesión de servicios. El órgano de contratación no responderá de las desviaciones que se puedan poner de manifiesto durante la explotación del servicio y, en su caso, ejecución de las obras e inversiones previstas, asociadas a dicho servicio, por lo que en todo caso el contratista asumirá plenamente el riesgo y ventura de la explotación del servicio.

16.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado.

16.1.3. La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

16.1.4. La persona contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de la ejecución del contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una orden del Servicio Andaluz de Salud.

16.1.5. La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de suministro de toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud, en los términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Su incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido texto legal.

16.1.6. Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SiREC-Portal de licitación electrónica así lo permita.

16.2. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

La responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El órgano de contratación, a través del Responsable del contrato, en su caso, o el Representante de la Administración y de su equipo, podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras efectuando para ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de las mismas. Estas funciones no supondrán ninguna reducción de la responsabilidad de la Dirección de obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad del Representante de la Administración ni de su equipo.

El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al Responsable del contrato, en su caso, o el Representante de la Administración, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista, según lo previsto en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.

La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

16.2.1. RESPONSABLE DE DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA PERSONA CONTRATISTA

En el apartado 20 del cuadro resumen se establece que el contratista habrá de designar a la firma del contrato un representante responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, que será

el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución, provenientes del responsable del contrato para garantizar su correcta ejecución.

16.2.2 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

No se establece la constitución de una comisión de seguimiento tal y como se indica en el apartado 22 del cuadro resumen.

16.2.3. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 62.3 de la LCSP y a la **cláusula 5 del presente pliego**, para la concesión la administración deberá además designar una persona que actúe en defensa del interés general para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio. Deberá también velar por los derechos de las personas usuarias, estableciendo un sistema de sugerencias y quejas que habilite a los usuarios para formularlas ante el contratista o el responsable del contrato. En este contrato se designa como Unidad encargada de la defensa del interés general a la Subdirección de los Servicios Generales del Hospital Universitario Torrecárdenas.

16.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

Confidencialidad.

La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que el Servicio Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de Confidencialidad conforme al modelo **ANEXO XIV del presente pliego**.

Protección de datos.

La persona contratista estará obligada a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa complementaria.

16.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

16.4.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas.

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamaciones.

La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas.

La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

16.4.2. Obligaciones en materia medioambiental de la persona contratista:

El Servicio Andaluz de Salud ha asumido el compromiso de incorporar a sus sistemáticas de gestión las responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando así la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las políticas socialmente comprometidas del Gobierno Andaluz. La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los Centros del Servicio Andaluz de Salud ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores de los Centros como de los usuarios del mismo y de los habitantes de la Comunidad Autónoma Andaluza en su conjunto.

Como instrumento inicial para implementar ese compromiso ambiental, el Servicio andaluz de Salud ha implantado y mantiene vigente un Sistema Integral de Gestión Ambiental, en adelante SGA, conforme a la norma ISO 14001, acorde con su

Política Ambiental e incorporando procedimientos que permiten mantener la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros dependientes. Además, en este contexto, el Servicio Andaluz de Salud, en su condición de gran consumidor de energía, avanza un paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión energética en su Sistema de Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el manejo de los recursos energéticos fundamentales para la realización de su actividad.

La Política Ambiental, aprobada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, proporciona el marco ambiental en el que deben desarrollar sus actividades todos los Centros y está enmarcada en la intención general del Servicio Andaluz de Salud de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar los efectos en el cambio climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño energético. Entre los principios que definen la Política Ambiental se encuentran:

- Cumplir los requisitos legales ambientales, así como aquellos relacionados con el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética, que resulten aplicables.
 - Cumplir con otros requisitos ambientales que la organización suscriba de manera voluntaria y, en la medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición.
 - Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales producidos por la actividad de los distintos Centros, en especial los debidos a la generación y gestión de los residuos sanitarios, así como los derivados del uso de recursos energéticos.
- Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos naturales (agua, combustibles y energía).
- Impulsar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el diseño para mejorar el desempeño energético.
 - Controlar periódicamente los aspectos ambientales de las instalaciones, adoptando acciones correctivas cuando fuese necesario, tanto en situación normal de funcionamiento como en las situaciones de emergencia.
 - Potenciar entre los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes interesadas la concienciación y sensibilización ambiental.
 - Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación y formación ambientales en su área de referencia.

En cumplimiento de lo anterior, la persona contratista asume ante el Servicio Andaluz de Salud los siguientes compromisos, en su caso, en el correcto desempeño ambiental, debiendo con carácter general:

- Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o productos contratados.
- Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean aplicables.
- Colaborar activamente con el Área responsable del SGA del SAS en lo relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades y/o servicios, y en la obtención de datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. (Por ejemplo: consumo de recursos, generación de residuos, vertidos, etc.).
- Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión ambiental.

- Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable.

La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA del SAS.

- Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.

Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión recogidas en el SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la persona designada por la persona contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier incidencia de carácter ambiental.

- Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

- Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida selectiva de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no peligrosos y generados en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, envases ligeros, vidrio, etc.).

- Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su caso, poco contaminantes.

- Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

- Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos necesarios para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha información).

- Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección.

- Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a los distintos órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos considerados como peligrosos generados durante la actividad del contratista que sean de titularidad de la persona contratista. Así mismo presentará evidencia documental que garantice la retirada de todos los residuos por un gestor autorizado.

16.4.3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 202 de la LCSP, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución:

De conformidad con lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP, y para el caso de contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por parte de la persona contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Dicha condición especial tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211

- Condiciones especiales esenciales de ejecución de tipo social (previstas en el artículo 202.2 lcsp).

Se incluye la siguiente condición especial de ejecución de entre las que se enumeran en el artículo 202.2 de la LCSP, estando vinculada al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145 de la LCSP, no es, directa o indirectamente, discriminatoria y es compatible con el derecho comunitario:

La empresa contratista deberá promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, bien mediante su contratación directa para la explotación o mediante la contratación de servicios auxiliares a la explotación de la concesión (limpieza, seguridad, mantenimiento de las instalaciones, etc.) a través de centros especiales de empleo de iniciativa social.

La empresa contratista remitirá anualmente a la persona responsable del contrato la relación de todo el personal afecto al contrato con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, o los contratos con centros especiales de empleo de iniciativa social para la prestación de servicios auxiliares a la explotación de la concesión o de sus subcontratas de servicios.

La concesionaria aportará anualmente a la persona responsable del contrato la justificación de la contratación del personal directo mediante la relación de las cotizaciones a la Seguridad Social del personal afecto al contrato con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; y/o la relación de facturas emitidas por centros especiales de empleo de iniciativa social para la prestación de servicios auxiliares a la explotación de la concesión, junto con la acreditación de su condición como centros especiales de empleo de iniciativa social.

Esta condición especial de ejecución promueve la inclusión activa de personas con especiales dificultades de inserción, garantizando oportunidades reales de empleo y fomentando la responsabilidad social de las empresas. Asimismo, impulsa la contratación de servicios a través de centros especiales de empleo de iniciativa social, reforzando las políticas públicas de inserción laboral y generando un impacto positivo en el entorno económico y social del proyecto. Al vincularse directamente con el objeto del contrato y no implicar discriminación, cumple los requisitos del artículo 202.2 de la LCSP, alineándose con los principios de igualdad y cohesión social.

Se considera obligación esencial a los efectos de resolución del contrato en caso de incumplimiento de esta conforme se señala en la letra f) del artículo 211 de la LCSP.

Su incumplimiento podrá considerarse como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

-Condiciones especiales esenciales de explotación del servicio de aparcamiento.

Se garantizará una reinversión de al menos el importe correspondiente al 1% de la inversión inicial, destinado al mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, cada 7 años de duración de la concesión, y hasta su finalización.

El concesionario deberá contemplar dicha reinversión como parte de su actividad durante la explotación del servicio, para reparación, mantenimiento y renovación de instalaciones mecánicas eléctricas, tecnológicas y de control, así como para adecuación de oficinas y espacios de trabajadores.

Esta condición tiene la consideración de obligación de carácter esencial del contrato y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato.

A estos efectos las personas licitadoras deberán aportar un compromiso del cumplimiento de dicha condición, que tendrá el carácter de obligación esencial a efectos del artículo 211 f) de la LCSP.

16.5 DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipos en la ejecución del objeto del contrato deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo indemnizar al Servicio Andaluz de Salud por todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.

17. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

17.1 Plan de seguridad y salud:

El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de comprobación del replanteo.

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo de cada una de las obras, en el que se dejará constancia de los extremos mencionados.

Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra.

El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en materia de Seguridad y Salud de las obras.

17.2. Licencias y autorizaciones:

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de la licencia de obra y de cualesquiera otras licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando del órgano de contratación los documentos que para ello sean necesarios.

Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de las tasas, impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante.

17.3.- Seguros

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa los siguientes:

1.-Antes de la ejecución de la obra.

Seguro de responsabilidad civil y profesional: Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo del importe del presupuesto total de la inversión ofertado, IVA incluido; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administración como promotora de las obras.

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

Asimismo, está obligado a formalizar y mantener en vigor durante todo el periodo contractual una póliza de seguro de daños e incendios y de robo, hurto o expoliación para garantizar y responder de las instalaciones, mobiliario, enseres y utillaje.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene vigencia por el periodo de garantía de las obras.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

La póliza de seguro no incluirá sublímite alguno ni franquicias.

La póliza de seguro exigida se acreditará mediante la presentación de un certificado de la aseguradora, en el que habrán de constar los siguientes extremos:

- Que la empresa adjudicataria tiene suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil y profesional, que cubre la obra de construcción incluida en el proyecto.
- Que garantiza los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros, incluido al HUP y que sean reclamados por éstos.
- Que la empresa adjudicataria está al corriente de pago de la correspondiente prima.
- Que el adjudicatario se compromete a comunicar a la Administración la anulación de la póliza o cualquier modificación sustancial de sus condiciones.
- Que en caso de siniestro indemnizable por la póliza, la aseguradora abonará el 100% de la indemnización al perjudicado, independientemente de reservarse el derecho de reclamación al asegurado de la franquicia correspondiente, en su caso

Seguro todo riesgo construcción:

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación, IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud.

2.- Previamente a la explotación de la concesión:

Con carácter previo a la finalización de la obra, se requerirá la suscripción de la póliza relativa a la fase de explotación de la obra.

La entidad adjudicataria deberá suscribir una póliza de seguro que cubra las responsabilidades en que, como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente contrato, pudiera incurrir, toda vez que, además de los daños que puedan producirse a las instalaciones, existen riesgos físicos para las personas usuarias de las mismas derivados de la prestación del servicio.

La entidad adjudicataria deberá suscribir contrato de seguro de responsabilidad civil, sin franquicia y deberá cubrir todos los daños que se ocasionen a terceros y bienes como consecuencia de la ejecución del contrato, con independencia del valor de los mismos.

El contrato de seguro deberá contemplar como riesgos asegurados el de incendios, con referencia obligatoria al continente, y el de responsabilidad civil, cada uno de ellos por separado y de manera diferenciada.

En la póliza de seguro deberá constar el Servicio Andaluz de Salud como asegurado adicional sin perder su condición de tercero.

La unidad encargada del seguimiento de la fase de explotación de la concesión deberá examinar, con carácter previo a la puesta en explotación del centro, la póliza de seguro y documentación presentada por el concesionario, al objeto de comprobar que incluye como riesgo asegurado los daños derivados de la ejecución del contrato y mantiene su vigencia durante todo el plazo de ejecución, a cuyo efecto se emitirá informe por los técnicos de la unidad encargada de la fase de explotación de la concesión.

Asimismo, se deberá exigir al contratista la documentación que acredite la renovación o prórroga del seguro, de forma que mantenga su vigencia durante todo el plazo de ejecución del contrato.

El importe mínimo de los riesgos asegurados no será inferior a 5.000.000 euros sin franquicia
La entidad adjudicataria queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

Con el fin de acreditar la correcta cobertura de la citada póliza, el adjudicatario deberá presentar certificado de la entidad aseguradora que acredite todos los extremos de la póliza anteriormente indicados.

18. EJECUCIÓN DE LA OBRA

18.1. Modalidades ejecución de obra

Las obras se realizarán conforme a los proyectos de ejecución definidos en la cláusula 5 del PPT que rige el contrato, en el plazo establecido en el apartado 7.1.3 del Cuadro Resumen del presente pliego, y aprobado por el órgano de contratación.

La ejecución de la obra que corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte aprobado por el órgano de contratación.

Este podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que estime oportunas.

18.2 Riesgo y ventura en la ejecución de la obra.

Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá el riesgo operacional de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 239.

Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento con terceros.

El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecución de las obras, tanto por mayor o menor medición de unidades de obra como por la aparición de imprevistos, con sujeción estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.

El riesgo y ventura del concesionario será en todo caso compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras y con las aportaciones de la Administración, previstos en el presente pliego y regulados en la LCSP.

18.3 Interpretación del proyecto.

Corresponde al director de la obra, apoyado técnicamente en el resto de los agentes de la Dirección Facultativa de las Obras, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo y concreción.

Expresamente deberá suplir con la interpretación técnica del anteproyecto las indeterminaciones que pudieran surgir durante su ejecución, y que se asume deben ser resueltas durante la misma.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las competencias que a la figura del responsable del contrato atribuye la cláusula 11 del PPT que rige el contrato.

18.4 Comprobación del replanteo.

Para el anteproyecto de obra, que incluye este contrato, se celebrará el acto de comprobación del replanteo, el cual debe celebrarse el mismo día.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato con arreglo al PPT y a la oferta del concesionario se procederá a la comprobación del replanteo, acto en el que intervendrán el concesionario, a través del delegado que haya sido designado para la obra o su representación legal, el director de la obra y el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y del Representante de la Administración, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el concesionario hubiera hecho observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el responsable del contrato, en su caso, o el Representante de la Administración, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el concesionario por el hecho de suscribirla. Si existen circunstancias que lo impidan, quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndolo constar en el acta, resolviendo la Administración lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivó la falta de duración, el órgano de contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al concesionario. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

18.5 Programa de trabajo:

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

18.6 Modificación del proyecto.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.a, Sección 3.a, Capítulo I, Título I, del Libro Segundo de la LCSP y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261. El plan económico financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.

18.7 Suspensión de las obras.

La suspensión de las obras no dará derecho al contratista al abono de daños y perjuicios en virtud de lo dispuesto en el artículo 251 LCSP.

18.8 Terminación, comprobación y recepción de las obras.

A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración concedente. El levantamiento y contenido del acta de comprobación se ajustará a lo dispuesto en el Anexo I al presente pliego.

Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión realizada.

La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de explotación a todos los efectos previstos en los pliegos.

18.9 Modificación de las obras.

El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.

Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 de la LCSP.

19. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

19.1 Mejoras propuestas por el contratista.

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas en proyecto.

Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá proponer al Órgano de Contratación al que estén adscritas las obras la autorización de las mismas, en todo caso deberá realizarlo el Órgano de Contratación por escrito manifestado en el plazo de quince días. El contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino solo al abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o cuantitativa.

De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental:

- Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello.
- Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa indicando la idoneidad de la misma.
- Aceptación de este, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta.
- Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las mejoras y se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la condición de que el contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna.

De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente.

En el caso de que surgieran modificaciones por causas imprevistas que dieran lugar al correspondiente proyecto modificado, se incluirían en el mismo las copias de los documentos reseñados, recogiendo las mejoras de que se trate, según las condiciones indicadas.

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasione.

En todo caso, si la propuesta de mejora del contratista implicara la inclusión de precios simples nuevos se deberá aplicar en todo caso el art. 242.4 c) ii) de la LCSP. Y en el caso de que represente la inclusión de nuevas unidades de obra se deberá tramitar el correspondiente expediente de modificación del contrato.

19.2. Obligaciones en relación con la seguridad y salud laboral.

La persona contratista deberá contar con un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y con toda la normativa vigente relativa a esta materia, de manera que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores.

La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa contratante.

A los efectos de establecer los cauces necesarios para la Coordinación de Actividades Empresariales, y dar así cumplimiento a la normativa de aplicación (artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales), la persona contratista deberá cumplir la Coordinación de Actividades Empresariales que se recoge en la normativa de referencia en coordinación y que se concreta en el Servicio Andaluz de Salud en el Procedimiento 02: Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS. Todo ello con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos laborales que puedan generarse en el desarrollo de la prestación objeto del contrato.

La persona contratista se compromete a subsanar, actualizar y aportar la documentación que fuera necesaria a la unidad de prevención.

En concreto, la persona contratista:

- Aportará la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, las condiciones de trabajo existentes y la existencia de trabajadores con especial sensibilidad a determinados riesgos. Esta evaluación y su correspondiente planificación de la actividad preventiva deberán estar actualizadas y a disposición de la dirección de cada centro.
- Establecerá controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, debiéndose modificar las medidas de prevención cuando, como resultado de estos controles, se aprecie por la dirección del centro y/o de la persona contratista que son inadecuadas a los fines de protección requeridos.
- Deberá asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que vaya a realizarse. Si la utilización de un equipo puede presentar un riesgo específico, se reservará su uso a los encargados del mismo, adoptando las medidas que reduzcan los riesgos al mínimo.
- En caso de ser necesario, deberá proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual (EPI) adecuados frente a aquellos riesgos que no se hayan podido evitar y adaptados a las características de sus trabajadores. Vigilará que los EPI sean efectivamente utilizados por los trabajadores, asegurará un correcto mantenimiento de los EPI y procederá a su reposición cuando sea necesario.
- Deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, con independencia de la modalidad o duración de ésta, como cuando cambien los equipos de trabajo, o se introduzcan nuevas tecnologías.

- Garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Colaborará en las medidas de seguridad y planes de emergencia vigentes en el centro de trabajo.
- En caso de utilizar productos químicos para la realización de las tareas propias de la actividad, se responsabilizará de que estos cumplan la legislación vigente de aplicación en materia de seguridad y salud laboral, y que el uso de los productos se realice conforme a lo dispuesto en las fichas de datos de seguridad, debiendo aportar copia de las mismas a la unidad de prevención de riesgos laborales. Asimismo, se responsabilizará de que todos los productos químicos utilizados cumplan la legislación vigente de aplicación en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la eliminación de los mismos.

La persona contratista cumplirá las normas de seguridad y de régimen interior establecidas en el centro que le sean de aplicación, en orden a prestar la mejor calidad en la atención al usuario y a alcanzar el mejor nivel de seguridad de los ocupantes del centro, tanto usuarios como trabajadores, visitas, etc.

El incumplimiento de los compromisos en materia laboral establecidos en la presente cláusula asumidos por la persona contratista dará lugar a la siguiente penalidad:

- El 2% de los ingresos totales del mes en que se produzcan, reiterándose cada mes hasta que se cumpla con el compromiso o los compromisos incumplidos.

19.3. Obligación de sigilo.

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

19.4 Obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia Pública de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a suministrar al órgano de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en éste ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.

20. EXPLOTACIÓN DE LA OBRA

20.1 El uso y conservación de la obra está sujeto a las siguientes prescripciones:

El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y conservación de las obras.

El personal encargado de la explotación de las obras, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de las obras, formulando, en su caso, las denuncias pertinentes.

A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal del concesionario debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por la Administración competente, así como cualquier otro admitido en derecho.

El concesionario podrá impedir el uso de las obras a aquellos usuarios que no abonen la tarifa correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en la legislación sectorial correspondiente.

Igualmente, el concesionario está obligado a conservar, reponer y reparar las obras, incluido el viario de superficie situado en la vertical del aparcamiento y su pavimento, así como las obras accesorias o vinculadas con la principal, en su caso, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que se prevean tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

El concesionario deberá mantener las obras de conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.

20.2 Retribución del concesionario.

Será la detallada en el apartado 3.3 del presente Pliego.

20.3 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

La Administración restablecerá el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, para mantener su equilibrio económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario en los siguientes supuestos:

- a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el artículo 262 de la LCSP.
- b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.

Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la LCSP.

En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario.

Cuando sea procedente por concurrir alguno de los supuestos que dan lugar el restablecimiento del equilibrio económico, el mismo se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de las obras, la modificación en la retribución a abonar por la Administración concedente, la reducción del plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Asimismo, en los casos previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado 2 del artículo 270 y siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial.

21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN.

21.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.

21.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto.

21.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 y siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

21.4. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de la LCAP.

21.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

22. CESIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, la persona adjudicataria podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato (**apartado 26 del Cuadro Resumen**).

Con arreglo al artículo 285 de la LCSP, en el supuesto de cesión de las participaciones de la sociedad concesionaria constituida por los licitadores con el propósito de concurrir a la licitación con arreglo a lo previsto en el artículo 66.2 de la LCSP, se considerará que se produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las participaciones.

23. SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado

ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración (**apartado 29 del Cuadro Resumen**). No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

La estructura prefabricada, modular, ampliable, desmontable y reutilizable, deberá ser realizada por la concesionaria (o por una de las empresas integrantes de la UTE concesionaria, en su caso), debido a que se considera un aspecto crítico de la concesión, pues es el elemento central de la misma, sin el cual no se podría llevar a cabo el contrato.

Una realización por una tercera empresa incrementaría de manera exponencial la dificultad del control de la calidad, montaje y mantenimiento, pues, aunque su realización se ajuste al proyecto básico y de ejecución aportada por la concesionaria, siempre hay aspectos que son de muy difícil control (cimentación y anclajes, montaje, instalaciones auxiliares) y que podrían afectar a la seguridad de la estructura y su durabilidad.

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontractar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

- Prestaciones no susceptibles de subcontratación en la ejecución de obra del proyecto: PRESTACIONES DE CARÁCTER PRINCIPAL.
- Prestaciones no susceptibles de subcontratación en la prestación del servicio PRESTACIONES DE CARÁCTER PRINCIPAL.
- Prestaciones susceptibles de subcontratación en la prestación del servicio: Las PRESTACIONES DE CARÁCTER ACCESORIO

Y por lo tanto subcontratables son:

1. Servicios de conserjería y vigilancia del aparcamiento.
2. Servicio de limpieza del aparcamiento.
3. Servicios de mantenimiento, reparación, restauración y rehabilitación del aparcamiento.
4. Servicios financieros, de contabilidad y asesoría jurídica.
5. Cualquier servicio de carácter accesorio y complementario a la actividad principal de estacionamiento de vehículos.

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontractar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

En el caso de que en el momento de presentar la documentación del propuesto adjudicatario la persona subcontratista no sea la misma que la indicada en su oferta deberá aportar la identificación de la nueva persona subcontratista, así como de la persona que legalmente la represente, justificación de su capacidad y solvencia para ejecutar la prestación objeto de subcontratación, por referencia a elementos técnicos y humanos, a la experiencia y, en todo caso, la acreditación de no estar incurso en prohibición de contratar.

Si se tratase de un cambio en el porcentaje a subcontractar deberá concretarse la parte a subcontractar y, en su caso, justificación de la capacidad y solvencia de la persona subcontratista en los términos señalados en el párrafo anterior de no ser suficiente la declarada en el DOUE.

En modo alguno puede celebrarse el contrato de subcontratación antes de veinte días desde que las circunstancias recogidas en los dos párrafos anteriores se pongan en conocimiento del órgano de contratación, salvo que con anterioridad hubiera sido expresamente autorizado por el mismo.

Durante la ejecución del contrato cualquier modificación que se produzca en relación a la subcontratación deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación por el contratista principal con las justificaciones necesarias en su caso.

El incumplimiento por el contratista principal de estas prohibiciones lleva aparejada la siguiente penalidad:

- 2% del presupuesto de ejecución si se produce durante la fase de construcción y el 2% de los ingresos mensuales totales si se produce en la fase de explotación del aparcamiento.

La cuantía total no podrá ser superior al 50% del importe del subcontrato.

Se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211 f) de la LCSP,

En todo caso, el órgano de contratación puede exigir la información que considere precisa sobre las personas subcontratistas, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de solvencia y de que no se encuentran en ninguna de las situaciones de exclusión para contratar con la administración.

24. SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.

Se admite la posibilidad de subrogación del contratista en los términos previstos en el artículo 98 de la LCSP (**apartado 17 del Cuadro Resumen**).

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación podrá modificar las condiciones de prestación de la concesión por razones de interés público debidamente justificadas.

El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en la LCSP, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la revisión del Plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.

Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se registrará por las normas generales de modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 LCSP.

26. SECUESTRO O INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN

Si el concesionario no pudiese hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación del aparcamiento público por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro la explotación, el órgano de contratación podrá acordar el secuestro de la concesión, previa audiencia del concesionario. El acuerdo del órgano de contratación se notificará al concesionario, concediéndole un plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el cual sin que tales correcciones se hayan llevado a efecto, se ejecutará el secuestro.

Una vez efectuado el secuestro, la Administración asumirá la explotación directa del aparcamiento público y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria.

La explotación del aparcamiento público objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, y le será devuelta, una vez finalizado el secuestro, con el saldo resultante tras satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores y deducida, en su caso, la cuantía de las penalidades impuestas.

El órgano de contratación determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter temporal, no pudiendo exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El cese del secuestro será acordado por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del concesionario, cuando se acredite la desaparición de las causas que lo motivaron y el concesionario justifique estar en condiciones de proseguir la normal explotación del aparcamiento público. Si, una vez transcurrido el plazo fijado para el secuestro, el concesionario no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación procederá a la resolución del contrato. En el caso de que el concesionario haya acudido a la financiación privada mediante emisión de títulos, la Administración podrá optar entre resolver la concesión o acordar el secuestro cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos, en los supuestos que prevé el artículo 272.3 de la LCSP y, de la misma forma, podrá optar por el secuestro de la concesión cuando la causa de resolución de la concesión no sea imputable al concesionario y los acreedores no se hubieran satisfecho íntegramente de sus derechos.

27. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES.

27.1. Cumplimiento De Plazos.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el plazo establecido en el presente pliego, así como, en su caso, de los plazos parciales señalados en el mismo.

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. Imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

27.2. Penalidades.

El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente pliego y en el contrato. En caso de incumplimiento, el órgano de contratación podrá imponerle penalidades económicas, de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación, conforme a lo establecido en el presente pliego. En este mismo apartado se establecen los incumplimientos graves que darán lugar al secuestro o resolución de la concesión, con independencia de las penalidades que en cada caso procedan por razón del incumplimiento.

El límite máximo de las penalidades no podrá exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción IVA excluido y del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior si la concesión estuviese en fase de explotación.

Los límites establecidos para las penalizaciones serán los fijados en este pliego siempre que el daño causado no supere la cuantía máxima fijada en los mismos. Si la cuantía del daño causado es superior a la penalización máxima establecida en esta cláusula, se ampliará el límite hasta el valor del daño causado con el límite previsto en el artículo 192 LCSP.

Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario será, además del previsto en el pliego, el establecido en los artículos 192.2, 193 y 264 de la LCSP.

Si, a pesar de la imposición de penalidades, el concesionario persiste en el incumplimiento de sus obligaciones, la Administración le requerirá nuevamente otorgándole un plazo para su cumplimiento, transcurrido el cual sin que se haya

cumplido, podrá imponerle multas coercitivas por importe diario de 3.000 euros, salvo que la legislación específica determine otro importe.

27.2. A. En Fase de construcción

a) Por demora, en la entrega del edificio a la Administración.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA excluido

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

b.1) Por cumplimiento defectuoso:

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:

- Si al tiempo de la comprobación, presentan deficiencias que impiden su puesta en explotación por causas imputables al contratista:

1. Se considerará incumplimiento **LEVE**, con una penalidad del 1% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico IVA excluido, cuando el volumen de obra afectado sea inferior al 10% del presupuesto de ejecución material.

2. Se considerará incumplimiento **GRAVE**, con una penalidad del 5% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico IVA excluido, cuando el volumen de obra afectado sea entre el 10% y hasta el 30% del presupuesto de ejecución material.

3. Se considerará incumplimiento **MUY GRAVE**, con una penalidad del 10% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico IVA excluido, cuando el volumen de obra afectado sea superior al 30% del presupuesto de ejecución material.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

- Por incumplimiento de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se podrá imponer una penalidad, calificada como muy grave, del 10% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico, IVA excluido.

b.2) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución:

Por incumplimiento de la condición especial de ejecución, se podrá imponer una penalidad del 5% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico, IVA excluido.

c) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Sí procede.

Se podrá imponer una penalidad del 1% del presupuesto total de la inversión ofertado por el adjudicatario en su plan económico, IVA excluido.

d) Por subcontratación:

- Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación (artículo 215.3 LCSP):

Hasta el 50% del importe del subcontrato, excluido IVA.

- 2% del presupuesto base de licitación sin IVA si se produce durante la fase de construcción y el 2% de los ingresos mensuales totales si se produce en la fase de explotación del aparcamiento.

La penalidad podrá alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

27.2. B En la Fase de explotación:

a) Por demora, en la puesta en marcha de la Concesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LCSP.

b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

Incumplimientos LEVES:

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir al servicio los medios personales y materiales suficientes para su correcta prestación.
- Incumplimiento de la obligación de remitir a la Administración en plazo documentación justificativa de los pagos a los subcontratistas o suministradores, y de los plazos de dichos pagos.
- La falta de atención y consideración al usuario, por el personal al servicio de la empresa adjudicataria, así como la no puesta a disposición del público del Libro de Reclamaciones.
- La interrupción del servicio sin causa que lo justifique durante más de 15 minutos y menos de 1 hora.
- La negligencia no relevante en la policía y conservación de las instalaciones del aparcamiento.
- El incumplimiento aislado u ocasional de las órdenes o prohibiciones dictadas por la Dirección del hospital.
- La omisión de datos o la tardanza en su entrega, cuando le sean solicitados
- La falta de limpieza y de conservación del aparcamiento
- La realización ocasional de prestaciones abusivas o insuficientes.
- El retraso o tardanza en ejecutar órdenes verbales de la inspección del Hospital
- Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en el presente pliego o impuestos por resolución administrativa, que no tenga la consideración de grave o muy grave.

Incumplimientos GRAVES:

- Interrupción injustificada total o parcial de la prestación del servicio.
- Cobro al usuario del aparcamiento de cantidades superiores a las legalmente autorizadas.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de explotación del servicio.
- Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.

- Incumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas o suministradores.
- Reiteración de los incumplimientos calificados como leves en el párrafo anterior.
- El incumplimiento de las órdenes de funcionamiento dictadas por la dirección del Hospital.
- La ocultación, omisión, deformación o negación de datos e informes que se soliciten por la Dirección del hospital, salvo que estas conductas estén legitimadas por alguna norma legal o reglamentaria.
- La reclamación o percepción de cualquier tipo de retribución de los usuarios que no sea de las expresamente autorizadas.
- Los impedimentos reiterados en el uso del aparcamiento a quienes tengan derecho a su utilización.
- La interrupción total o parcial del servicio de aparcamiento, sin causa que lo justifique durante más de 1 hora y menos de 12 horas.
- La desatención o el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Hospital, que impliquen la modificación del servicio.
- La conducta reiterativa en la realización de prestaciones abusivas o insuficientes que afecten al buen orden del servicio, cuando no constituyan falta leve.
- La realización de actividades no autorizadas o contrarias a la finalidad para la que se otorgó la adjudicación.
- El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Pliego de condiciones del Servicio, en el Reglamento de Régimen Interior o legislación que resulte aplicable siempre que las consecuencias de tal incumplimiento originen daños que perturben gravemente la prestación del servicio de aparcamiento o la actividad asistencial del Hospital.
- El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores.
- Incumplir lo establecido en relación con la subcontratación y cesión.
- Actuar con negligencia en el cumplimiento del ejercicio de los deberes de uso, policía y conservación del aparcamiento.
- Desobedecer las órdenes impartidas por la Dirección del hospital y actuar obstruyendo sus tareas de inspección.
- La reiteración en la comisión de faltas leves en número superior a seis veces en un mes ó veinte en un semestre.
- Haber sido penalizado por más de tres faltas leves en el periodo de un año.

Incumplimientos MUY GRAVES:

- Los actos u omisiones que puedan ser motivo de peligro para la salud pública, así como la tardanza o negligencia en corregir defectos o situaciones que determine peligro para las personas o cosas.
- La reiteración de dos faltas graves en un año.
- La contumacia comprobada en incumplir las instrucciones u órdenes del Hospital.
- La interrupción total o parcial del servicio de aparcamiento, durante más de 12 horas sin causa justificada.
- Cualquier práctica defraudadora o irregularidad graves en la forma de prestación del servicio, que suponga discriminación para los usuarios o enriquecimiento injusto
- Cualquier conducta que suponga abandono o deterioro culposo negligente de las instalaciones que integran el servicio
- La renuncia unilateral a la ejecución de la adjudicación.
- No realizar las actuaciones exigibles para la obtención de las autorizaciones o licencias legalmente necesarias para realizar las instalaciones y explotar el aparcamiento.
- No mantener actualizados los seguros previstos en los Pliegos y los exigidos por la legislación vigente en la materia, o el impago de las primas correspondientes.
- Incumplir las obligaciones relativas a la actualización de las garantías definitivas.
- No realizar los controles de gastos y costes, de forma que el Hospital pueda conocer, en cualquier momento, el estado financiero del adjudicatario.

Penalidad a aplicar a los incumplimientos:

	Servicio de explotación del aparcamiento
Infracción leve	1% de los ingresos totales de la concesionaria del mes en que se
Infracción grave	3% de los ingresos totales de la concesionaria del mes en que se
Infracción Muy grave	5% de los ingresos totales de la concesionaria del mes en que se produzcan

El límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación del servicio durante el año anterior.

En el caso de infracción de las condiciones de subcontratación, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215.3 LCSP, que establecen la posibilidad de imponer la penalidad no podrá superar el 50% del importe del subcontrato Afectado por el incumplimiento.

27.3 Responsabilidad Del Contratista Por Daños Y Perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

27.4 Procedimiento para la imposición de penalidades.

Para proceder a la imposición de las penalidades indicadas será necesario que los incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por el responsable del contrato. De esta certificación se dará traslado al contratista para que realice las alegaciones oportunas en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será trasladada al Órgano de contratación que resolverá sobre la imposición de la penalidad.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario, además de la penalidad, este correrá con los gastos de las actuaciones necesarias para corregir el hecho que dio lugar al incumplimiento.

Esta situación facultará al Hospital a adoptar las medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias y, si de dichas medidas se derivan gastos, procederá a exigir su pago del adjudicatario.

Todas las penalidades se harán efectivas mediante su abono por el concesionario, o, en su defecto, sobre la garantía que se haya constituido.

Los límites anuales de las penalidades serán los previstos en el presente pliego de conformidad con el artículo 264.2 LCSP.

VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

28. CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN.

La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme al apartado 3 del artículo 270 de la LCSP, o de las reducciones que se hubiesen decidido.

En dicho momento, quedaran igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión.

A la extinción del plazo de la concesión, las instalaciones se entregarán a la Administración, totalmente amortizadas, sin un fondo de reversión ni suma alguna que reclamar a la Administración por dicha entrega.

29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de extinción las recogidas en los artículos 209 y 278 de la LCSP.

Así mismo, son causas de resolución las recogidas en los artículos 211 y 279 de la LCSP con los efectos que se recogen en los artículos 213 y 280 de la citada Ley.

En los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal las obligaciones establecidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 de la LCSP tendrán el carácter de esenciales, y su incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, a efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del art. 211 de la LCSP.

En cualquier caso, serán causas de extinción las siguientes:

- A) Por vencimiento del plazo contractual. Vencido el plazo, la concesionaria cesará en la utilización privativa de las obras, construcciones e instalaciones cedidas y en la gestión del aparcamiento. El órgano de contratación ostentará la potestad de acordar y ejercitar por sí el lanzamiento.

Dos años antes del vencimiento del plazo, el órgano de contratación podrá designar un técnico que vigilará la conservación del aparcamiento, instalaciones y equipos, y propondrá las reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlas en las condiciones exigidas en este Pliego.

- B) Por resolución de mutuo acuerdo del contrato. Según el artículo 212.4 de la LCSP, la resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia de la concesión.
- C) Por las causas mencionadas en los artículos 211 y 279 de la LCSP y en cualquier caso por las siguientes:

a) Por incumplimiento de la concesionaria de alguna de las siguientes obligaciones esenciales:

- i. Por interrupción o abandono de la gestión y mantenimiento del aparcamiento por tiempo superior a un mes, sin autorización del órgano de contratación.
- II. Por cesión o traspaso de la concesión sin autorización previa del órgano de contratación.
- III. Por dedicar los bienes afectos a la concesión a usos diferentes de los específicamente señalados en el presente Pliego, sin la autorización previa del órgano de contratación.

b) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205 de la LCSP, darán siempre lugar a la resolución del contrato, según lo recogido en el artículo 212.2 de la LCSP

Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación:

- a) El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter esencial en el presente pliego.
- b) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- c) Modificación sustancial del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso de la persona contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.

30. REVERSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN.

Con anterioridad a la finalización del plazo de la concesión, el órgano de contratación adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las obras, así como de los bienes e instalaciones, y, en su caso, de la zona de explotación comercial, para que su entrega se verifique en las condiciones convenidas.

Extinguida la concesión, el concesionario deberá entregar a la Administración concedente las obras públicas incluidas en la concesión y los bienes e instalaciones precisos para su explotación, así como los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato, debiendo quedar reflejado todo ello en el acta de recepción. El levantamiento de este acta y su contenido se ajustarán a lo establecido en los artículos 256 y 243 de la LCSP. El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras, bienes e instalaciones no se hallasen en estado de ser recibidos, se hará constar así en el acta, señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, transcurrido el cual se llevará a efecto una nueva comprobación de los mismos.

De conformidad con el artículo 283.3 de la LCSP, los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración no podrán ser objeto de embargo.

(Conocido y aceptado en su totalidad)

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

LA PERSONA CONTRATISTA